

San Fernando, treinta de octubre de dos mil veintiuno.

VISTO, OÍDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS INTERVINIENTES. Ante este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando, constituido por los Jueces Felipe Cortés Ibacache, Marcela Yáñez Cabello y Marisol López Machuca, se llevó a efecto los días 18, 19, 20, 21, 22 y 25 de octubre en curso, la audiencia de juicio oral de la causa **RIT 71-2021**, seguida en contra del acusado **JAVIER ALBERTO SAAVEDRA MUÑOZ**, cédula de identidad número 15.350.896-8, chileno, soltero, 39 años de edad, nacido en Santiago el 21 de septiembre de 1982, divorciado, de oficios pintor, yesero y comerciante, domiciliado en sector San Agustín, sitio 23, comuna de Chimbarongo.

Sostuvo la acusación el Ministerio Público, representado por el Fiscal **Mauricio Maturana Catalano**, en tanto la defensa del acusado estuvo a cargo de los Defensores Penales Privados, **Davis Torres Pinto** y **María Graciela Herrera Acosta**.

Se desarrolló la audiencia de juicio de forma semipresencial a través de la plataforma Zoom, sin incidencias al respecto.

SEGUNDO: ACUSACIÓN Y ALEGACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO. El Ministerio Público fundó su acusación en los siguientes hechos:

“HECHO N° 1: Ocurrido con fecha 01 de abril de 2019, a eso de las 12: 30 a 13: 00 horas, 4 sujetos irrumpen en el domicilio de la víctima de iniciales M.A.C.L, ubicado en sector Las Acacias S/N comuna de Chimbarongo, dicho sujetos se identificaron como funcionarios de la PDI, uno de ellos vestía chaquetilla con el logo de la PDI, todos ellos exhibiendo e intimidando con armas de fuego; los sujetos se movilizaban en vehículo tipo jeep en la cual se encontraba otro sujeto, procediendo a sustraer diferentes juegos electrónicos, Tablet, luego exigieron la entrega de dinero, a la víctima la obligaron a que diera su cuenta rut logrando girar posteriormente la suma de \$ 160.000, además sustrajeron dos plantas de marihuana que se encontraban en el patio, luego se dan a la fuga del lugar.

Cabe señalar que el imputado Javier Saavedra Muñoz se concierta previamente con dichos sujetos, facilitando medios, entre ellos y concretamente su vehículo marca Hyundai de color blanco con vidrios polarizados, para llevar a efecto el delito.

HECHO N° 2: *Ocurrido con fecha 16 de abril de 2019, entre las 12: 30 horas a 13: 00 horas, en el sector Romeral Adentro S/N comuna de Chimbarongo, llegaron, previamente concertados, tres sujetos a dicho inmueble (víctima de iniciales R.V) en un vehículo Hyundai, de color blanco, quienes portaban chaquetas de color negro con el logo de la PDI , premunidos por de armas de fuego en el cinto del pantalón, entraron por una ventana procediendo a sustraer un televisor plasma marca Sony de 50 pulgadas, una ballestera, diversas prendas de vestir y calzados dándose a la fuga del lugar con las especies en su poder.*

Cabe señalar que el imputado Javier Saavedra Muñoz se concierta previamente con dichos sujetos, facilitando medios, entre ellos y concretamente su vehículo jeep marca Hyundai color blanco con vidrios polarizados, para llevar a efecto el delito.

HECHO N°3: *Fue así que el día 19 de julio del año 2019 el Tribunal de Garantía de San Fernando autorizó previa solicitud de la unidad de análisis criminal y foco investigativo la medida introducida de la interceptación telefónica pudiendo establecer que Javier Saavedra tiene como mano derecha y brazo operativo al imputado Juan Antonio Osorio Jorquera alias “El Coipo” para la venta de droga ilícita, droga que en su mayoría es traída desde la ciudad de Santiago, siendo su proveedor principal Elías Catalán Reyes alias “El Nano” Javier Saavedra mantiene vínculos con Eric Quilapi Rojas alias “El ratón laucha” y gestiona con esta información para la planificación de robos incluso comercialización de drogas.*

Asimismo Javier Saavedra alias “El ojito petróleo” mantiene nexos, vínculo y relación con Rodolfo Jiménez Medina alias “El Gato” donde este sujeto le compra y adquiere droga ilícita a Javier Saavedra en algunos casos a través de Juan Osorio alias “El Coipo” y por otro lado Javier Saavedra mantiene vínculos de relación y nexos con Carlos Alcaíno Alcaíno alias “El loco Tito” este sujeto también vende drogas o le ayuda a vender drogas como también a la elaboración de dosis y preparación de la droga en este caso “cocinar y secar la droga”;

Por otro lado Javier Saavedra mantiene nexos, vínculo y relación delictual con Sandra Lira y su grupo familiar compuesto por su tío Ladislao Lira Torres y su hijo Sebastián Salgado Lira y su sobrino Eduardo Lira Ibáñez todo en un mismo domicilio Fue así que con dicha estructura y dinámica criminal, la unidad de análisis criminal y foco investigativo solicita entradas y registros a los domicilios de los imputados implicados

TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
SAN FERNANDO

siendo autorizado con resolución de fecha 10 y 11 de octubre del año 2019 así se da inicio a la operación Hollywood que no es más que la ejecución de estas órdenes judiciales, fue así que la Bicrim de San Fernando con apoyo de otras unidades, con fecha lunes 14 de octubre de 2019 a las 6:00 horas se da inicio a este operativo que tuvo los siguientes resultados:

Primer domicilio de Eric Quilapi Rojas alias "El ratón o laucha" con domicilio en calle Afluyente número 2501 Block B, departamento 33 comuna de Peñalolén, a las 6:15 horas funcionarios policiales ingresan encontrando en poder del imputado un arma de fuego, un revólver calibre 22 marca llama serie N° 715035 no manteniendo autorización legal alguna para la tenencia e inscripción de dicha arma de fuego; domicilio de Don Eric Catalán Reyes alias "El Nano" ubicado en Glorias Navales N° 2035 Villa Los Héroes comuna de Maipú siendo las 6:10 horas se da inicio por funcionarios policiales, ingresan a este domicilio y logran encontrar e incautar diferentes especies a saber en poder y guarda del imputado un contenedor de cocaína, pasta base de cocaína en posición y guarda cuyo peso bruto es de un kilo 115 gramos, se logra también en el domicilio incautar, encontrar cannabis sativa con un peso de 46.6 gramos de dicho alucinógeno, también se encuentra clorhidrato de cocaína con 43,75 gramos como peso, se logra también encontrar una sustancia rosa cocaína, que se logra establecer que es cocaína sintética llamada tucci con un peso de 27, 9 gramos y unas pastillas fármacos azules 11,5 unidades, se logra también encontrar en este domicilio 100 tiros calibre 40 marca Blazer gros dos cajas una caja de 50 tiros cada uno, 15 tiros calibre 44 marca magtech, 10 tiros calibre 22 sin marca, se logra también incautar en el domicilio una pistola de fantasía marca Maxman calibre 4.5, otra pistola de fantasía marca Gabb fabricación italiana una pesa digital y un chaleco antibalas y la suma de \$932.000 en dinero en efectivo y mantenía entre sus pertenencias;

También se ingresa a los domicilios de la comuna de Chimbarongo sector San Agustín sitio 126 comuna de Chimbarongo, domicilio del blanco, líder o cabecilla Javier Saavedra que al momento del ingreso de la Policía de Investigaciones a las 6:30 de la mañana aproximadamente, no se encontraba en el lugar ,pero sí pudiendo encontrar sus pertenencias de dormitorio 48 balas Calibre 9 milímetros, \$473.000 en dinero efectivo, 31 cartuchos de escopeta un cargador de arma y un rifle marca Gamo y dos balines; asimismo en dependencias de su padre, toda vez que vive con su padre se encontró una escopeta, un arma de fuego en este caso el poder de Héctor Saavedra Pardo padre de Javier Saavedra una escopeta serie 9600883 sin ningún tipo de autorización legal para mantener en dicho

**TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
SAN FERNANDO**

domicilio dicha arma de fuego, también se ejecuta la orden en el domicilio ubicado en camino San Enrique sin número esquina callejón San Agustín también en la comuna de Chimbarongo, domicilio que corresponde al imputado Juan Antonio Osorio alias "El Coipo" se logró incautar el dicho domicilio en poder del imputado 23 cartuchos de escopeta calibre 12, 9 gramos de clorhidrato de cocaína, \$250.000 en dinero efectivo y diversas bolsas transparentes de tamaño pequeño utilizadas para la dosificación de drogas, se logra incautar el poder de Osorio un arma de foguero marca tóraxy cargada con 5 municiones, dichas municiones sin autorización alguna para su tenencia y guarda; se concurre también al domicilio de Carlos Alcaíno Alcaíno alias "El loco Tito" ubicado en San Agustín sin número casa de madera esquina de un callejón comuna de Chimbarongo logra incautar en posesión y guarda de este imputado dos contenedores que contenía marihuana elaborada con un peso de 129,17 gramos, se concurre hasta el domicilio también la Policía de Investigaciones de Rodolfo Jiménez Medina alias "El gato" ubicado este domicilio en José Miguel Carrera número 197 sector Codegua comuna de Chimbarongo; cerca de las 8:00 horas ya se logra Ingresar a dicho domicilio y encontrar en dicho domicilio dos balanzas digitales modelo sf - 400 se logra también incautar en posición y guarda una escopeta doble cañón marca nimrod weather serie N° 38858 calibre 16 y 2 cartuchos de escopeta calibre 16 todas estas armas de fuego y munición sin autorización alguna para su porte, tenencia y guarda.

Se concurre hasta el domicilio de la familia los Liras, Sandra Lira Cornejo domicilio ubicado en sector San Enrique sin número comuna de Chimbarongo a las 6:10 de la madrugada se efectúa esta diligencia se logró incautar en posesión y guarda a Sandra Lira mantenía 4 bolsas de nylon de cannabis sativa marihuana con un peso de 160 gramos, asimismo se logra incautar diversos envoltorios cuyo peso son una sustancia de polvo color rosado su peso 102,3 gramos, siendo de acuerdo a las pruebas de campo éxtasis un polvo, se logra incautar en su pertenencias la suma de dinero de \$12.221.000 pesos en dinero efectivo en 1143 billetes de \$1000 poner ejemplo de baja denominación de todo este dinero que mantenía la imputada Sandra Lira, también se le encontró el poder y en sus pertenencias directas dos contenedores de productos químicos que son utilizados de acuerdo a las máximas de experiencia a abultamiento de la droga, a mezclar la droga estas son lidocaína, de un primer contenedor y otro contenedor cafeína anhiora, también el hijo de Sebastián Salgado se le encuentra en su banano \$207.000 en dinero en efectivo, dinero de baja

denominación, dos bolsas de clorhidrato de cocaína cuyo peso es 3,7 57g todo esto en el banano que portaba Sebastián Salgado y entre sus pertenencias un arma de fogueo marca bruni modelo newpolis 9 milímetros con su respectivo cargador, así mismo en el dormitorio dependencia de Ladislao Lira Torres, tío de Sandra Lira y anexo a él la pieza de Eduardo Lira Ibáñez, en ellos en posición y guarda se logra incautar dos sacos de color blanco trasvasijados en tres bolsas de nylon transparente con un peso de 2 kilos 214 gramos de cannabis sativa marihuana elaborada así mismo a don Ladislao Lira se logró incautar un revólver calibre 22 color gris con negro marca vagal modelo vaster rr2 número de serie 203686, se logró incautar también en sus pertenencias 6 cartuchos en su interior una pesa de color marca ferremon DX y un ariete de metal confección artesanal con respecto a Eduardo Lira también en sus pertenencias habían tres bolsas de nylon y un frasco de vidrio todos estos contenedores de 66 gramos de marihuana elaborada, se logra encontrar en posición y guarda de don Eduardo Lira un rifle marca gamo modelo blacksburg color negro calibre 5.5 número de serie 04 - 16 -737291 - 3

*Por último **de acuerdo a todo el operativo y en TOTAL** se logra incautar en poder y guarda de en los domicilios de los respectivos imputados, la cantidad de 8 armas de fuego largas y cortas entre ellas, sin contar las 9 armas de fuego sin contar las 2 armas de fogueo, municiones y Balas alrededor de 200, droga Cannabis sativa en total 2 kilos 675 gramos de cannabis sativa, pasta base 1 kilo 115 gramos clorhidrato de cocaína total de 56 coma 32 gramos, droga tuci 27,9 gramos, éxtasis 102,3 gramos, vale decir 5 tipos de drogas y dinero en efectivo en total \$13.610.000 en dineros de distintas denominaciones, droga total 3 kilos 976 gramos que mantenían sin ningún tipo de autorización legal por ser droga ilícita”(sic).*

El Fiscal sostuvo que los hechos que conformaban la acusación configuran los delitos de **robo con violencia e intimidación**, previsto y sancionado en el artículo 436, inciso primero, del Código Penal; **robo en lugar habitado o destinado a la habitación**, previsto y sancionado en el artículo 440 N° 1 del referido código; **tráfico ilícito de drogas**, previsto y sancionado en los artículos 1 y 3 de la Ley 20.000; **asociación ilícita**, previsto y sancionado en los artículos 292 y 294 del Código Penal y **tenencia ilegal de municiones**, previsto y sancionado en los artículos 2 y 9 de la Ley 17.798. Todos los delitos se encontrarían en grado de **consumado**, atribuyéndole en los delitos de robo participación en calidad de **autor**

cooperador, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 N° 3 del Código Penal, en tanto que en el resto de los delitos, participación en calidad de **autor ejecutor**, conforme lo previsto en el numeral 1 del referido artículo.

Además, señaló que no concurrían circunstancias atenuantes de responsabilidad y sí la agravante del artículo 449 bis del Código Penal, pero solo en relación a los delitos de robo.

Solicitó las siguientes penas:

Por el delito de **robo con violencia e intimidación** la pena de 10 años de presidio mayor en su grado medio; por el delito de **robo en lugar habitado o destinado a la habitación**, la pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo; por el delito de **tráfico de drogas**, la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo y una multa de 100 UTM. Además, en los tres casos las penas accesorias legales del artículo 28 del Código Penal y la incorporación de huella genética al registro de condenados. Para el delito de **asociación ilícita** la pena de 2 años de presidio menor en su grado medio y, finalmente, para el delito de **tenencia ilegal de municiones**, 541 días de presidio menor en su grado medio; además para estos dos delitos las accesorias legales del artículo 29 del Código Penal. Por último, y en relación a todos los ilícitos, pidió la condena en costas.

En el **alegato de apertura**, sostuvo que la investigación se dio en un contexto de fenómenos que ocurrieron en sectores rurales de Chimbarongo que decían relación con una banda que se hacía pasar por funcionarios de la PDI en la que se logró individualizar a los participantes y judicializar. Dos de los casos que se plasman en los hechos 1 y 2, como lo señalarán los PDI Castro y Marambio dan cuenta que el acusado era el líder, cuya participación en el robo fue la de autor cooperador, pues no era él quien entraba a los domicilios ni intimidaba, sino que proporcionó el vehículo. Señaló que durante la investigación se hizo uso de la medida de interceptación telefónica en la cual el 19 de julio de 2019 comienzan las escuchas con lo que queda descubierta una red de tráfico de drogas y que culminó con la incautación en los domicilios, siendo el acusado quien tenía como socios y colaboradores a Juan Osorio, alias “El coipo”, Elías Catalán, alias “el nano” y Rodolfo Jiménez, alias “El gato”, quienes eran sus principales colaboradores y formaban parte de la red de droga, cuya ruta era Santiago-Chimbarongo.

Agregó que el 14 de octubre de 2019 hubo varias entradas a domicilios, lo que se llamó “operación Hollywood”, 5 de Chimbarongo y 2 en Santiago, en los que se incauta drogas, armas de fuego y dinero en efectivo, lo que no viene más que a corroborar las escuchas telefónicas, logrando la detención de varias personas, menos del acusado, quien tenía orden de detención desde octubre de 2019 y después de estar 8 meses como prófugo fue encontrado en Panguipulli por la PDI. Señaló también que se contaría con las víctimas de los robos y funcionarios policiales que participaron de las órdenes de diligenciamiento, otros que hicieron análisis de la información y las escuchas telefónicas, como de otros que referirían levantamientos de información, además, de prueba documental y pericial de drogas, con todo lo cual se pretendería probar los 5 delitos. Reiteró las épocas de cada una de las etapas de la investigación e insistió en que se acreditarían los hechos y la participación por lo que se pediría la condena. Finalmente, añadió que el acusado estuvo 8 meses de prófugo lo que implicó tener 2 acusaciones, una por el acusado y otra a parte, con el resto de los acusados mencionados en la causa, pero se podría contextualizar las imputaciones.

En la **clausura**, sostuvo el fiscal que respecto de los hechos 1 y 2 existió un patrón delictual que siguió presente en toda la imputación criminal, el que presentó los siguientes elementos: hechos ocurridos en el sector oriente de Chimbarongo; sujetos premunidos de armas de fuego; que ingresan a casas particulares; haciéndose pasar por funcionarios de la PDI, usando vestimentas, elementos distintivos y en búsqueda de droga, como señalaron la víctima del hecho 1 y la testigo 004. Elementos todos que se constituyen en un indicio y, por tanto, en una probanza para dar por acreditados los dos delitos de robo.

Agregó, que otro indicio poderoso fue el uso de un vehículo, el que se vinculó al acusado en ambos hechos, un jeep Hyundai, blanco, de vidrios polarizados, modelo Santa Fe, pertenencia que fue incluso reconocida por el acusado y su padre, el que estuvo en poder del acusado durante todas las etapas de la investigación. Que a raíz de este patrón delictual y de la existencia de un vehículo, surgieron desde el primer día sospechas, viendo pasar el vehículo por las cámaras del fundo Santa Berta, en horario coincidente con el que se aprecia en las cámaras. Además, se analizaron por Marambio y Castro las cámaras y se hizo la

comparación con el vehículo del acusado, para lo cual se realizaron auscultaciones y avistamientos presenciales en el domicilio del acusado y en un taller mecánico, e igualmente se levantó información de las redes sociales del acusado y de las menciones de una de las víctimas y de la prima y pareja de la segunda víctima.

Concluyó que del análisis conjunto de lo anterior, unido a que el acusado reconoció que mantuvo en su poder el vehículo con las características antes referidas, se probó la vinculación de su automóvil con la comisión de los delitos 1 y 2, en los que cupo al acusado autoría en los términos del artículo 15 N° 3 del Código Penal. Sobre el concierto previo, indicó que este se acreditó a través de las escuchas telefónicas con Eric Quilapi, permitiendo inferir que al menos hubo complicidad en los delitos de robo.

Sobre el delito de tráfico de drogas, explicó que no se atribuyó tenencia o guarda, porque no se le encontró droga al acusado, pero si el verbo rector de comercialización de diferentes sustancias ilícitas. Destacó que el primer elemento de incriminación fue la testigo 004, quien valientemente entregó su relato, el que fue complementado por el de los funcionarios Marambio y Castro. Este elemento debía unirse a un segundo elemento incriminatorio, que fueron los hallazgos de la droga en varios domicilios en el curso de la operación Hollywood, lo que se constituye en una probanza de contexto porque el acusado hablaba con Elías Catalán, a quien se le encuentra droga, además, el encartado tenía un socio que era Juan Osorio, apodado “El coipo”, al que también se le encuentra droga, armas y elementos para dosificar en su domicilio e igualmente a Eric Quilapi le hallan un arma de fuego, calibre 22.

De otra parte expuso, que las escuchas dieron cuenta de una asociación para cometer delito, no aquel correspondiente a la asociación de drogas sino que asociación ilícita en términos amplios. Añadió, que declararon los policías respecto de cada uno de los allanamientos y hallazgos, siendo analizadas en su composición las sustancias incautadas por el Servicio de Salud, con resultados positivos a drogas. Se refirió a la droga encontrada en la casa de Sandra Lira y a la gran cantidad de dinero, en cuya familia se constituía lo que llamó el “clan Lira” de modo que todos los referidos hallazgos en los diversos domicilios resultan ser

también indicios para establecer la participación del acusado en el delito de tráfico de drogas.

Agregó que las escuchas telefónicas se efectuaron durante 3 meses y en ese tiempo el acusado se contactó con Elías Catalán, Rodolfo Jiménez, Juan Osorio, tratando de explicar el acusado al hablar se refería a la venta de pescado, pero sin encontrar respaldo en la prueba. Respecto de Rodolfo Jiménez señaló que hablaban de depósitos que le realizaba al acusado, el que declaró en enero de 2020, cuyo contenido ratificó en el juicio, en cuanto a que le compraba droga al acusado, la frecuencia y forma de pago.

Destacó la conversación que sostuvo el acusado con Juan Osorio el día 24 de agosto, en la que este último menciona a un consumidor de nombre Juan Carlos que le debía plata por la actividad comercial de venta de drogas, haciendo alusión “al Chiqui”, otro apodo del acusado.

En lo referente al delito de tenencia ilegal de municiones, señaló que Marambio y Castro encontraron en el dormitorio del acusado 48 balas, las que según el informe pericial balístico, eran aptas para el disparo en un arma de fuego, siendo la refutación de la defensa en cuanto a que la policía había regresado al domicilio luego de retirarse del allanamiento, una mera conspiración sin base ni pruebas.

Sobre la asociación ilícita, detalló los requisitos que deben estar presentes, reconociendo que es difícil probar dicha figura en Chile, aclarando que se atribuye participación en una asociación ilícita no solo de la Ley 20.000 sino que también por los delitos de robos. En subsidio planteó que se configura la calificante prevista en el artículo 19 letra a) de la referida ley, esto es, haber formado parte de una agrupación de delincuentes, sin incurrir en el delito de organización del artículo 16 de la misma ley.

Finalmente, señaló que la prueba de la defensa era de mala calidad siendo la versión acusado acomodaticia y sin respaldo, además de desfasada en el tiempo, por tanto no concluyente.

Solicitó en definitiva un veredicto condenatorio por los 5 delitos.

Al momento de la **réplica** planteó que la víctima del hecho 2 es quien da el dato de Iván González y esa información se corroboró. Que las actividades que

realizaba el acusado no eran más que un hobby, sin que se pueda desvirtuar las imputaciones; que no estimó necesario ir a la empresa Hyundai para conocer las características del vehículo, pudiendo aplicarse las máximas de la experiencia. En cuanto a que la acusación era confusa sostuvo que no hay acusaciones perfectas, sin perjuicio que se da cuenta en ella de varias personas involucradas y acciones típicas.

Sobre la veracidad del relato de Rodolfo Jiménez y que este habría delatado a su compañero para buscar un beneficio procesal, dijo que era ir en contra de la buena fe que se presume y por tanto, se puede concluir que dijo la verdad. Referente a las municiones sostuvo que el propio acusado reconoció que vivía con su padre y tenía un dormitorio, lo que fue lógico porque estaba su carné de identidad en una cómoda y ahí mismo estaban las balas, por lo que se le pudo vincular.

Finalmente, sobre la asociación ilícita, reiteró que se acusó por la que contempla el Código Penal, considerando las escuchas, tratativas y conversaciones que tenían por objeto la comisión de delitos contra la propiedad y de la Ley 20.000, ya que el acusado no actuó solo, tenía una dinámica para los delitos de tráfico de drogas, por lo que hay elementos para entender que estamos ante la figura del artículo 16 o al menos del 19 de la aludida ley.

TERCERO: ARGUMENTACIONES DE LA DEFENSA. En su **alegato de apertura**, expuso que el acusado era un youtuber conocido de Chimbarongo que participaba en actividades sociales, que tenía su Facebook abierto desde siempre, el que si bien mantenía relaciones sociales con personas que sí se dedicaban a la actividad delictual, no hacían del ilícito su vida diaria. Que su defendido llegó a Chimbarongo desde Santiago, y en los dos primeros hechos no tuvo participación, no se le liga con las especies sustraídas ni se le encuentran especies. La fiscalía señala que se quedó dentro del vehículo o lo prestó, lo que no es lo mismo, y la única prueba sería que se toma conocimiento que tiene un vehículo del tipo SUB que se atribuye que está en los hechos presente, pero no se incorpora ninguna característica del móvil, luego, el solo hecho de facilitar un vehículo no es suficiente para la participación atribuida, por lo que pediría la absolución por los hechos 1 y 2.

En cuanto al delito de tráfico de drogas, asociado al supuesto delito de asociación ilícita, planteó que su defendido, a la mayoría de los coimputados no los conoce, solo a algunos, con quienes tuvo contacto, según las escuchas, las que son de manera ambiguas y generales, lo que se podría explicar en el juicio y dar cuenta de quiénes son los interlocutores. Luego señaló que es un hecho de la causa que esas personas si tenían posesión o guarda, pero el acusado no realiza ninguna acción que diga relación con los verbos rectores de la Ley 20.000 por eso que la fiscalía presenta la acusación completa y propone que tienen incidencia, pero no se le puede endosar responsabilidad por delitos de terceras personas, pidiendo por ello la absolución por estos dos ilícitos.

Sobre la tenencia de municiones añadió que el acusado no estaba en el lugar y no tenía guardada ningún tipo de munición.

Finalmente, expuso que habría prueba de cargo abundante, pero deficiente en calidad por lo que se debería absolver.

En la **clausura**, señaló el defensor por los delitos de robos, que la investigación en contra de su defendido se inicia básicamente por rumores, ya que la víctima de uno de los hechos dijo que personas del sector señalaban que el acusado era peligroso y estaba vinculado con delitos; además, que supo que el acusado llevó cosas robadas a un domicilio, lo que no fue corroborado por los policías, de modo que fue solo información general y vaga de personas del sector, lo que denota la calidad de la información con la que se inicia la investigación. Luego se indaga en el perfil público de sus redes, en las que era conocido por hacer obras sociales y trabajos, en la que daba a conocer su teléfono.

Agregó que la prueba del persecutor no fue apta para ubicar al acusado en el lugar de los hechos, ni intimidando, robando o manejando, solo se tuvo un indicio de un vehículo jeep, color blanco, modelo Tucson, ubicado en la vía pública cerca del lugar de los hechos 2 horas más tarde, sin que se haya hecho un peritaje para determinar la distancia que había desde el lugar del robo del 1 de abril al lugar donde estaba la cámara, pudiendo ser otro vehículo el avistado porque el informe de los fotogramas era de mala calidad y se sugería un peritaje técnico que no se hizo, por lo tanto, solo se contó con la imagen de un vehículo blanco en el que no se veía la PPU ni las características distintivas. Sin que se haya recurrido a

la fuente más básica que era la empresa Hyundai para conocer las características de fábrica y que tampoco le mostraron las fotografías del vehículo a la víctima.

Además, se insistió en vidrios polarizados y llantas, pero no supimos si eran de fábrica o particulares.

Luego señaló que no quedó claro que el acusado haya prestado su vehículo a sabiendas, solo hay meras presunciones, insuficientes para una sentencia condenatoria. No se acreditó un concierto previo, en las conversaciones nada se habla de hora, lugar, de especies sustraídas, del medio de transporte, solo se entregan datos que la fiscalía interpreta, siendo además, las escuchas posteriores a los robos, por lo tanto no pueden ser prueba de concierto previo.

Sobre el delito de tráfico de drogas señaló que la acusación es confusa porque no se atribuye la posesión de la droga encontrada en los domicilios, sino que lo que se quiere acreditar es la actividad indeterminada de comercialización, lo que no constituye un delito, salvo que se estime que es una conspiración. La fiscalía propone que hay venta de droga fundada en las escuchas, las que siempre tienen margen de error. En relación a la declaración de Rodolfo Jiménez que refiere que el acusado le vendía droga sostuvo que no es fiable porque tal como él declaró, su abogado le recomendó hacerlo para obtener un procedimiento abreviado por lo tanto no es información verídica ni de peso para formarse convicción. Además, la vecina que declaró dijo que era Osorio el que vendía y que nunca vio al acusado vender a diferencia de lo que declaró Rodolfo Jiménez, quien lo hizo con ánimo ganancial para obtener un beneficio procesal.

En relación a las municiones, indicó que había dos lugares que se habitaban en un mismo sitio, y acusado y su padre señalaron que no tenían conocimiento de dichas especies. Por el contrario, los dos policías, sin tener corroboración, atribuyen que el espacio físico en el que se hallaron, al acusado. Además, la cédula de identidad no fue fotografiada ni incautada, pese a que Castro lo afirmó. De otra parte, Marambio dijo que el padre del acusado declaró en tal sentido, pero no fue corroborado por Castro. No hubo ratificación de la prueba, salvo asertos verbales.

Sobre la prueba de la defensa expuso que esta dio cuenta que el acusado es conocido por hacer obras sociales, trabajos vinculados a cebiche y pescados y al

mundo de la construcción, además publicaba en las redes sociales su número de teléfono personal.

Por último, sobre la asociación ilícita, indicó que se hicieron escuchas solo por 3 meses, que no se pudo establecer a través de ellas un centro de poder, jerarquía, sometimiento de una persona a otras, ni perdurabilidad en el tiempo. En definitiva, pese a que la prueba fue abundante, no fue de calidad ni suficiencia para acreditar, más allá de toda duda razonable, los hechos de la acusación, por lo que pidió la absolución por todos los delitos.

Al momento de la **réplica** señaló que es posible que Rodolfo Jiménez haya declarado la verdad, pero también existe la posibilidad que haya querido un beneficio procesal, de lo que deberá hacerse cargo el tribunal.

En cuanto a la asociación ilícita, insistió en que no se dan los requisitos, se incorporaron 20 escuchas de un período de 3 meses, respecto de una persona a la que no se le incauta nada; no hay jerarquía, a lo más una cobranza de dinero de poca monta, de modo que pudo ser posible el comercio de droga de un lugar a otro, pero sin estructura jerárquica para estimar que se configura la asociación ilícita de la Ley 20.000.

CUARTO: DECLARACIÓN DEL ACUSADO. El acusado, **Javier Alberto Saavedra Muñoz**, legalmente advertido de su derecho a guardar silencio renunció a éste y, en consecuencia, optó por declarar.

Fue así que contó que, al lado de la casa donde se le acusa del primer robo llevaba 4 años comprando el alimento de sus perros e iba todas las semanas a comprar y la señora que vive al lado de esa casa era una señora que le hacía el aseo por casi 12 años a Sandra Lira y nombran una camioneta Hyundai Tucson sin patente y él hacía videos sociales y salía todos los días en las redes sociales haciendo obras y participaba en bingos para ayudar y la persona que nombra el fiscal que hace los robos, que es Eric Quilapi, hace tiempo que el fiscal lo sacó de los robos y le dio un abreviado por su “pura pistola” y se nombra a Juan Osorio, como que buscaba los datos y él le facilitaba la camioneta. Que le da impotencia porque solo él llegó acusado por robo y supuestamente los autores ya estaban condenados por cosas totalmente diferente; que jamás lo reconocieron, nunca lo pillaron, siendo ilógico si todos los días salía en redes y páginas por hacer obras

sociales e incluso hizo campaña con el director del hospital para conseguir una silla de ruedas y así se hizo conocido en Chimbarongo.

Respecto al segundo robo que se dice que extrajo un televisor indicó que en el allanamiento se llevaron “una tele” de 32 pulgadas como para justificar que era la del robo, pero no era así y nunca se fugó, pues del momento del allanamiento no estaba en su casa, buscó abogado para entregarse.

La escopeta y tiros eran de su papá, están con sus padrones al día y tienen los papeles; que hasta el día de hoy su papá está firmando; que su casa “la dieron vuelta” y no pillaron nada; en la casa de su padre estaban los tiros y las balas; que su padre lo único que no había hecho era cambiar el domicilio de Maipú a Chimbarongo; su papá salió al tercer día libre y en el momento en que él se pensaba entregar le pidió por favor que no lo hiciera porque ya había perdido un hijo y “la Sandra Lira” estaba pagado para que lo mataran y le ofreció a su primo plata para que lo acusara. Además, el fiscal le ofreció a su primo Juan Osorio que cambiara su declaración para acusarlo a él. También el fiscal le ofreció “al gato” y a Catalán la libertad para que lo acusaran. Que querían llegar al blanco porque lo tenían como líder. Que con el tío, primo e hijo de Sandra Lira nunca ha hablado. Que Sandra Lira estuvo cumpliendo condena de 10 años por tráfico y también por receptación y está en la calle.

Sobre el hecho N°3 indicó que todas las conversaciones que tienen dicen relación con negocios, pues era contratista de pintura, trabajaba en yeso y llegó a tener más de 30 personas trabajando a su cargo y cuando en Chimbarongo se puso difícil la cosa empezó a comprar fruta y revenderla, además, los fines de semana en canchas y ferias de Chimbarongo vendía cebiche y pescado, el que compraba en el terminal pesquero a Elías Catalán, a quien específicamente le compraba tiburón y lo vendía como albacora. Además, compraba morones y frambuesas y cuando salían chales trabajaba en pintura y yeso. Sostuvo que no ha vendido droga ni ha cometido micro tráfico ni tráfico y que vivió 30 años en San Luis y nunca ha hecho lo que se le imputa.

Sobre las municiones y la escopeta insistió que estaban en la casa de su padre y eran de aquél, quien vivía en el mismo sitio, pero en casas separadas.

A las preguntas del fiscal indicó que a abril de 2019 llevaba viviendo en Chimbarongo como 2 años o 1 año y algo; que antes vivía en Maipú. Que en Maipú le decían “Chiqui” y en Chimbarongo lo apodaban “ojitos de petróleo”. Que vive en el sector de San Agustín de Chimbarongo junto a su padre, en un sitio en el que hay dos casas; en una vivía él con sus tres hijos y mujer y en la otra su padre, pero eran casas apartes. Que en octubre de 2019 vivía en su casa, pero se quedaba también en la casa de su papá cuando no estaba su señora.

En abril de 2019 no recuerda muy bien en qué trabajaba, pero le pintó el chalet a María José Quintanilla en el Lago Rapel y de diciembre a abril estuvo comprando morones y frambuesas y llevando a la vega poniente con su compadre Juan Manuel López Parra que vive en Maipú.

Que a abril de 2019 tenía una Hyundai Santa Fe, color blanco, de 3 corridas de asiento, petrolera, vidrios polarizados de fábrica y se sacaba fotos con ese vehículo y hacía videos. Antes tuvo un Gran Nómade que se lo vendió a Sandra Lira. Que el vehículo Hyundai lo usaba habitualmente hasta para ir a comprar el pan porque era súper flojo, el que vendió en prenda, tal cual como lo compró, a su hermano Claudio Saavedra Muñoz en el 2019, pero no recuerda fecha y su hermano se lo llevó a Antofagasta.

Que la PDI allanó su casa el 14 de octubre de 2019 y no estuvo ya que se encontraba en Maipú viendo a su hija mayor a quien la visitaba fin de semana por medio; se fue a verla el domingo 13 de octubre en la mañana y en la tarde fue a visitar a su exsuegro Elías Catalán, porque estaba de cumpleaños y vivía en villa Los Héroes, lugar en el que se quedó hasta las 3 am del lunes 14 y, posteriormente, se fue a quedar en la casa de un amigo. Que estando en Santiago se enteró del allanamiento y ahí buscó abogado; que su papá le pidió que no se entregara porque “la Sandra Lira” pensaba que él la había “sapeado” y lo quería matar. Añadió que no sabía que tenía orden de detención en su contra; que fue detenido el 7 o 9 de junio de 2020 en Panguipulli. Que estaba allá por lo que le pidió su familia, para proteger su vida y su papá sabía lo que le estaba pasando; que no se arrepiente porque fueron 8 meses que de haber estado acá (en la cárcel) hubieran sido peores. Que antes había trabajado en Panguipulli y un caballero que lo conocía le pasó una cabaña para que se quedara.

Sobre el arma indicó que era una escopeta Famae que su papá la tenía hacía más de 20 años, con sus padrones al día y también sus cartuchos, los que usaban porque son fanáticos de la caza y siempre la tuvo en regla. Respecto a las municiones y balas, señaló que su papá le contó que cuando hicieron el allanamiento volvió la PDI a las 2 horas, es decir, cuando su papá ya estaba detenido y ellos (PDI) pusieron las municiones en su casa, pero sobre ese punto tiene la información su padre porque él estuvo en el allanamiento.

Señaló que con su exsuegro, Elías Catalán, al año 2019 mantenían una relación porque es el abuelito de su hija y tienen relación de exsuegro a yerno; los vincula una niña de por medio.

Sobre Rodolfo Jiménez, apodado “El gato” o “El huaso”, sostuvo que lo conoció jugando en tercera división e hicieron amistad, además, hicieron varios negocios juntos, los que también tiene en su Facebook, entre ellos, vendían frutillas; en Tacna compraba camisetas de clubes y Jiménez las vendía, negocios que hicieron del 2017 al 2019; que Rodolfo era a quien más conocía en Chimbarongo, lo conoce desde los 23 años.

A Carlos Alcaíno lo conoce desde hace mucho porque desde niño iba a veranear a Chimbarongo.

Con Juan Antonio Osorio, son primos, como hermanos, lo conoce de toda la vida y lo apodan “El coipo”; así lo bautizó en sus videos que se hicieron virales. En el 2019 Osorio le pagaba por usar un furgón que era de su propiedad ya que tenía una cuadrilla de trabajadores y aparte salían a cazar y pescar; que hablaba por teléfono siempre con él en el año 2019 y también hablaba por teléfono con su exsuegro, alias “El nano”, quien le dio el negocio del pescado y él hacía cebiche y ese negocio lo mantuvo desde antes del 2019 y, además, vendía albacora pero era tiburón.

Indicó que declaró en la investigación y dije lo del pescado, de las frambuesas, de las pinturas y que el fiscal le ponía en tela de juicio muchas actividades, pero tiene pruebas. Que tuvo una cebichería en Maipú antes de cambiarse a Chimbarongo, pero en Chimbarongo vendía en las ferias y canchas junto a su papá.

Que a Sandra Lira le enyesó la casa que tiene atrás de su sitio y le dejó su Jeep para que se lo vendiera porque tenía una automotora, además, tenía una amistad con la hija de aquella de nombre Fanny Salgado Lira a quien siempre llamaba por teléfono y ella le prestaba una escopeta cuando salía a cazar.

A la defensa contestó que jamás había estado privado de libertad; que hace 20 años tuvo su primer problema por vender cebiche en la feria, después por manejo en estado de ebriedad y por último por un hurto de un pedazo de carne que se robó de tonto, en un supermercado.

Tiene claro que hay una persona que lo está acusando de los robos y le hace muchas invenciones, cree que es por envidia, porque se empezó a juntar con la expareja de esa persona y decía que le había presentado mujeres, y la envidia es porque se hizo conocido por hacer obras sociales.

Que Sandra Lira habría pagado para que le hicieran algo malo porque habría “sapeado”, lo que ella misma le dijo a su papá cuando iban juntos en el carro policial, específicamente le dijo a su papá “vos viejo conchetumadre vas a pagar las consecuencias porque tu hijo nos sapeó”, además, decía que por su culpa habían perdido plata. Además, esta mujer a su primo le ofreció 2 millones de pesos por cambiar su declaración y acusarlo. Señaló que cree que Sandra Lira piensa que los “sapeó” porque él no estaba en el momento de la detención. Que ella es la persona que abastece a todo Chimbarongo y que tiene más poder. Que le han hecho atentados en su contra en la cárcel ya que ella los ordena desde la calle y sabe que si sale en libertad se va a tener que ir de ese lugar porque lo va a mandar a matar; ella se dedica a traficar, siempre ha hecho lo mismo, tiene una condena de 10 años por eso. Que ella pensó que teniéndolo en la cárcel se iba a zafar porque le hacía falta un culpable; que le servía más muerto porque así él no iba a poder defenderse y cuando fue el incidente en el que murió una persona en el módulo 12, un sujeto que le tenía consideración le contó que él valía 4 millones de pesos y desde ahí lo tienen que traer a las audiencias resguardado porque le han llegado lanzazos.

Sostuvo que no ha conversado con nadie sobre tráfico de drogas.

A continuación su defensa le exhibió **9 pistas de audio**, de aquellas ofrecidas como **otros medios de prueba** por el Ministerio Público, correspondientes a

escuchas obtenidas al interceptar su teléfono celular, precisando en relación a la pista **07082019/1942** que en esa ocasión hablaba con su exsuegro, Elías Catalán Reyes del negocio que tenían de los pescados porque aquel tenía un carro de pescados y andaba comprándolos en Iloca y después el acusado los iba a buscar a Maipú y se los traía a Chimbarongo. Sobre la pista **070820191945** indicó que nuevamente hablaba con Elías Catalán, el que le decía que el cebiche quedaba igual de rico con hartito aliño porque no le tenía fe al cebiche de tiburón, solo que había que echarle más limón y más aliño y quedaba igual de bueno. Además, que al cebiche que hacía le echaba mitad de pescado y mitad de jibia para que abundara.

Luego sobre la pista **120820191800**, señaló que hablaba con “El gato”, el que le debía una plata y le ofreció el negocio de los medallones de pescado y no llegaron a acuerdo, pero la plata se la debía al hijastro de “El nano”, de nombre Marco y a él no le depositó esa plata.

En relación a la siguiente pista **120820192252** explicó que hablaba con Fanny, hija de Sandra Lira, porque él se había comprado una lavadora, un refrigerador y una secadora y se estaba consiguiendo camioneta para traérsela desde Maipú y ellos tenían compraventa de vehículos.

Sobre la pista **150920192215** indicó que nuevamente hablaba con Fanny, sobre la escopeta que le habían prestado para ir a cazar y la dejó en la casa de Juan Osorio, su primo y ella la pasó a buscar. Le prestó una escopeta y unos tiros.

Respecto a la pista **150820190022** aclaró que hablaba con “El laucha”, Eric Quilapi, con el que estaba viendo un trabajo y lo dejó contactado con su primo Juan Osorio porque él se quedó en Maipú ya que estaba visitando a su hija.

A continuación y sobre la pista **150820190101**, explicó que hablaba con Eric Quilapi sobre el mismo tema del trabajo y también lo dejó conectado con su primo, porque estuvo varios días en Santiago, y ellos quedaron hablando con Juanito del trabajo que andaban viendo. Que Eric venía llegando de Argentina hacía como un año y tenía la intención de hacer las cosas bien y quería ayudarlo, pero “a las finales” terminó haciendo él el trabajo solo. Iban a ver el trabajo de la pintura, pero lo hizo él.

Enseguida explicó sobre la pista **170820191645** que la conversación era con Eric, a quien dejó hablando con su primo porque él andaba en otra, ya que tenía a

su hija enferma. Hablaban de “la San Lucho” porque era la villa donde se crio, que es la San Luis, donde vive su hija mayor y el trabajo de la ferretería era en ese lugar.

A continuación se le exhibió la **pista 200820192013** respecto de la cual explicó que hablaban del generador porque no tenían luz y él les prestaba el suyo y cuando andaban con Juan cazando se encontraron una planta de marihuana y él no fuma, pero se enojó con ellos porque la estaban secando y la habían como achurruscado, de hecho “al loco Tito” en el allanamiento le pillaron eso en una caja de zapatos.

Finalmente, señaló que todos los sujetos con los que hablaba salieron “con abreviado” y él es el único preso.

Posteriormente y una vez finalizada la recepción de la prueba de cargo, el **acusado solicitó ser oído nuevamente**, lo que el tribunal autorizó en virtud de lo dispuesto en el artículo 326 inciso final del Código Procesal Penal, esto es, para que aclarara o complementara sus dichos y con el fin de incorporar la prueba de descargo.

Fue así que su defensor le exhibió **48 imágenes o “pantallazos”** obtenidos de la red social Facebook de su página personal. Una a una fue explicando de qué se trataba, señalando respecto de las imágenes N° 1 a 6 que se referían en lo medular a la actividad de preparación de cebiches que realizaba cuando vivía en la comuna de Maipú, todas entre los meses de mayo y junio de 2017; en las imágenes N° 8 a 16, 18, 20, 22 a 29, 31, 32 y 34, diferentes actividades de ayuda social, entre ellas, bingos a beneficio o desayunos a personas de escasos recursos, y saludos o peticiones de hacer publicidad de parte de terceras personas a través de su red social, ya que tenía muchos seguidores; y desarrolladas en diversas fechas del año 2018 y 2019. Otras imágenes describieron diferentes trabajos que dijo realizaba, principalmente en el área de la construcción, como pintura y enyesado, correspondientes a las N° 19, 30, 33, 41 a 44, 46 a 54, todas en diferentes fechas, una de ellas del año 2008, pasando por el 2012, 2013, 2014, 2015 y 2018. Además, en la imagen N°17, promocionaba desde la Vega Poniente la venta de frutas que compraba en Chimbarongo en diciembre del año 2018; la N° 18 correspondía a un

saludo que enviaba a un tercero, N° 21 lo etiquetó un primo y amigo; y la N° 35 muestra un saludo para él de parte de un tercero.

Además, el defensor le exhibió al acusado **27 videos**, de diferentes duraciones, en los que aparecía el encartado y que habían sido compartidos en la red social Facebook pública, en 11 de los cuales explica que se encuentra realizando trabajos de construcción y en uno de ellos de venta de frutas, el que dijo que llevaba con “El gato”; en otros 15 videos se muestra en actividades de ayuda social y en uno, específicamente en el N° 3, junto a “El gato”, quien iba regularmente a su casa a compartir, no solo a comprar droga, como lo dijo y en 3 videos aparece junto a “El coipo, su primo, específicamente en el N° 11 dijo estar trabajando junto a su primo en una casa del Lago Rapel y en los 18 y 27 en actividad social y saludos a terceros, respectivamente.

A continuación el defensor le exhibió al encartado **7 imágenes** correspondientes a “pantallazos” que habrían sido extraídos de la plataforma WhatsApp de su teléfono. Detalla respecto a las imágenes N° 1, 4, 5 y 7, que se trataría de 2 conversaciones entre su hermano y “El gato”, ofreciéndoles este último diversos productos que estaba vendiendo para que la madre del encartado los ofertara en el puesto que tenía en la feria, porque el gato siguió dedicándose a ese negocio, pero ahora con su familia.

En relación a las imágenes N° 2, 3 y 6, sostuvo que se referían a diálogos entre su hermano y una persona de nombre Nelson, a quien anteriormente el encartado le había vendido su vehículo, cuyo contenido era de coordinaciones para concretar la venta en favor de su hermano Claudio.

Finalmente, señaló el acusado que, cuando llega a la cárcel y lo unen con la supuesta banda, su abogado le pidió al fiscal agregarlo a la banda para que llegaran todos juntos a Juicio Oral, porque eso era lo justo, y después fueron todos a preparación de juicio oral y el fiscal le dijo a su abogado y a él que lo iban a separar porque iba a juicio abreviado; que después le ofreció 3 años y no los quiso aceptar porque no iba a reconocer delitos que no había cometido. Le pareció raro que el fiscal insistiera en separarlo de todos los demás acusados si eran una supuesta banda. Con el transcurso del tiempo se dio cuenta que la banda completa

estaba afuera, a todos los que le habían pillado la gran mayoría de cosas y en ese entonces cuando el fiscal se lo ofreció él no quiso aceptar su propuesta.

Por último, en la oportunidad para que dijera una **palabras finales** al cierre del juicio, señaló que pedía al tribunal que se tomara en cuenta que tiene 39 años, que es la primera vez que está involucrado en una situación tan delicada y que pedía igualdad en relación a las otras personas que estaban en la misma situación que él.

QUINTO: CONVENCIONES PROBATORIAS. Los intervinientes durante la audiencia de preparación del juicio oral no arribaron a convenciones probatorias.

SEXTO: PRUEBA APORTADA. Con el fin de acreditar la existencia del ilícito por el cual dedujo acusación y la participación del responsable, el **ente persecutor** incorporó en el juicio **prueba testimonial**, consistente en la declaración de los siguientes testigos: testigo protegido “Nº1”; testigo protegido Nº 2 o denominado “004”; Testigo de Iniciales M.A.C.L.; María del Rosario Riveros Lizama; Rodolfo Armando Jiménez Medina; Camila Orietta Castro Sazo; Cristian Marambio Guajardo; Felipe Valladares Catrileo; Marco Venegas Contreras; Julio Soto Valdés; María Reed Vergara; Cecilia Molina Zapata y María Pilar Sotelo Aguilera.

Además, como **prueba pericial**, la declaración de Patricio Muñoz Cruz, perito balístico.

Como **prueba documental**: ordinario Nº 6442/41556/2019, de 11 de noviembre de 2019, emitido por Autoridad Fiscalizadora de San Fernando; Acta de Recepción Nº 2097 /2019, de 15 de octubre de 2019, sección de comiso Dirección del Servicio de Salud O’Higgins; Ordinario (oficio) Nº 663, de 14 de octubre de la BICRIM de San Fernando, Policía de Investigaciones de Chile; Acta de Recepción Nº 2097/2019, de 15 de octubre de 2019, sección de comiso Dirección del Servicio de Salud O’Higgins; Informe de Análisis Químico Nº2397 y el Informe de Efectos y Peligrosidad para la salud pública de la Cannabis y Anexo relativo a la pureza de THC asociados al referido análisis químico; Informe de Análisis Químico Nº2398 y el Informe de Efectos y Peligrosidad para la salud pública de la Cannabis y Anexo relativo a la pureza de THC asociados al referido análisis químico; Reservado Nº

919, de 8 de noviembre de 2019, Unidad de Decomisos servicio de Salud O'Higgins; Protocolo de Análisis Químico asociados a las NUE 5187351, 5187352, 5187353, 5187354 y 5187340; Informe de Efectos y Peligrosidad para la salud de la Ketamina, Informe de Efectos y Peligrosidad para la salud de el MDMA, Éxtasis; Ordinario (oficio) N° 665, de 14 de octubre de la BICRIM de San Fernando, Policía de Investigaciones de Chile; Acta de Recepción N° 2095/2019, de 15 de octubre de 2019, sección de comiso Dirección del Servicio de Salud O'Higgins; Reservado N° 918, de 8 de noviembre de 2019, Unidad de Decomisos Servicio de Salud O'Higgins; Informe de Efectos y Peligrosidad para la salud pública de la cocaína clorhidrato; Ordinario (oficio) N° 666, de 14 de octubre de la BICRIM de San Fernando, Policía de Investigaciones de Chile; Acta de Recepción N° 2096/2019, de 15 de octubre de 2019, sección de comiso Dirección del Servicio de Salud O'Higgins; Informe de Análisis Químico N°2395 y el Informe de Efectos y Peligrosidad para la salud pública de la Cannabis y Anexo relativo a la pureza de THC asociados al referido análisis químico; Informe de Efectos y Peligrosidad para la salud pública de la Cannabis y Anexo relativo a la pureza de THC asociados a análisis químico N° 2396; y una Cartola bancaria del Banco Estado, correspondiente a la Cuenta RUT de la víctima de iniciales M.A.C.L, fecha de emisión 5 de abril de 2019.

Finalmente, como **otros medios de prueba**, incorporó un set fotográfico de 11 imágenes del sitio del suceso, especies o vestigios encontrados y levantados como evidencia desde el domicilio ubicado en Glorias Navales N° 2035 de villa Los Héroes, comuna de Maipú; respaldo de 20 escuchas telefónicas asociadas a los números telefónicos de Javier Saavedra Muñoz y de Juan Antonio Osorio Jorquera; y un set fotográfico de 10 imágenes anexadas al informe policial N° 3859 de 05 de diciembre de 2019.

Por su parte la **defensa** adhirió a la prueba del persecutor y ofreció como **prueba propia** la declaración de los **testigos** Héctor Orlando Rojas Reuque y Héctor Rene Saavedra Pardo, y, como **otros medios de prueba**, 7 imágenes de pantallazos de la plataforma WhatsApp, que darían cuenta del vínculo comercial y laboral entre el acusado y "El gato" (primo); 48 imágenes de pantallazos de la red social Facebook, que darían cuenta de las actividades que desempeñaba el acusado

en el transcurso de su vida y que hizo pública en redes sociales; y 27 videos correspondientes a las actividades que realizaba el acusado en el transcurso de su vida y que hizo pública en redes sociales.

SÉPTIMO: DECISIÓN DEL TRIBUNAL. Tal como se adelantó al dar a conocer el veredicto, este Tribunal decidió, por votación unánime, **absolver** a **Javier Alberto Saavedra Muñoz** de las acusaciones deducidas en su contra por el Ministerio Público, de ser autor cooperador de un delito consumado de **robo con intimidación**, previsto y sancionado en el artículo 436, inciso primero, del Código Penal, en relación con los artículos 432 y 439 del mismo cuerpo legal, perpetrado el 1 de abril de 2019 en la comuna de Chimbarongo, y de ser autor cooperador de un delito consumado de **robo en lugar habitado**, previsto y sancionado en el artículo 440 N° 1 del Código Penal, cometido el 16 de abril de 2019 en la comuna de Chimbarongo; correspondientes a los hechos N° 1 y 2 de la acusación fiscal, respectivamente.

Igualmente, por el mismo *quorum*, absolverlo de las imputaciones de ser autor de un delito consumado de **tenencia ilegal de municiones**, previsto y sancionado en los artículos 2 y 9 de la Ley 17.798, que habría sido sorprendido el 14 de octubre de 2019 en la comuna de Chimbarongo, y de ser autor de un delito consumado de **asociación ilícita**, previsto y sancionado en los artículos 292 y 294 del Código Penal, correspondientes al hecho N° 3 de la acusación fiscal.

Por el contrario, y por la totalidad de sus miembros, se resolvió **condenarlo** como autor de un delito consumado de **tráfico ilícito de drogas**, previsto y sancionado en los artículos 1 y 3 de la Ley 20.000, perpetrado entre los meses de julio y octubre de 2019, recogido también en el hecho N°3 del libelo pretensor.

OCTAVO: DELITO DE ROBO CON INTIMIDACIÓN. ACREDITACIÓN DEL HECHO PUNIBLE. Conforme se acusó a Saavedra Muñoz, era tarea del Ministerio Público acreditar los diversos elementos del tipo penal aludido y la participación atribuida al acusado, debiendo específicamente y, en concordancia con la acusación, presentar sus medios de prueba para dar por establecidos que cuatro sujetos no identificados se apropiaron de especies muebles ajenas, sin la voluntad de su dueño, con ánimo de lucro y mediante la utilización de intimidación, con quienes el encartado se habría concertado previamente,

facilitándoles para la comisión del robo su vehículo marca Hyundai, color blanco, con vidrios polarizados.

Fue así que para acreditar el delito se aportó el testimonio de la víctima de iniciales **M.A.C.L.**, quien señaló que el 1 de abril de 2019 entre las 12.30 a 1.30 horas se encontraba durmiendo en una dependencia de su domicilio ubicado en el sector San Enrique de la comuna de Chimbarongo, cuando sintió gritos de su abuela y al llegar a la cocina donde ella estaba, observó que habían entrado cuatro sujetos que aparentaban ser de la PDI, los que usaban chaquetillas con el logo y se encontraban armados. Vio que uno de los individuos la apuntaba con una pistola en la cabeza, pese a que tenía una niña pequeña en sus brazos; que a él lo sacaron de la cocina, le preguntaban por su padre y que les entregara la droga o lo mataban. Que les pasó un frasco con marihuana que tenía para su consumo y desde el patio sacaron 2 plantas de la misma especie de un metro y medio de altura cada una, sin dejar de apuntarlo con un arma.

Detalló que a tres de ellos les vio el rostro, pero no pudo reconocer a nadie durante las diligencias de la investigación. Además, que había un quinto sujeto que esperaba afuera del inmueble, sentado en el asiento del piloto de un jeep blanco que se encontraba estacionado, el que no ingresó, sin poder verlo ni advertir otras características del vehículo, el que puede haber sido modelo "Tucson". Contó igualmente que los 4 sujetos, además de la droga, se llevaron una tablet, un banano, una colonia, un rifle de postones, un Play 3, la tarjeta de memoria de su teléfono y como le pidieron dinero y no tenía, lo obligaron a darles la clave de la tarjeta de débito de su cuenta RUT del Banco Estado, huyendo finalmente por el acceso principal de la casa. Agregó que pudo corroborar posteriormente que desde una caja vecina le habían girado \$160.000, como se refrendó con la incorporación de la mencionada **Cartola bancaria de la cuenta RUT de la víctima en Banco Estado**, en la que figura un giro por dicha suma con fecha 2 de abril de 2019.

Explicó que sintió mucho temor, quedando en shock e hizo la denuncia en la PDI de San Fernando, sin recordar en qué fecha, dato último que pudimos conocer con el testimonio de la funcionaria de la **PDI María Pilar Sotelo Aguilera**, quien dio cuenta de haber recepcionado esa denuncia el día 5 de abril de 2019, dato que también señalaron los agentes **Cristian Marambio y Camila Castro**, quienes

indicaron haber tomado conocimiento de este hecho en el contexto de la investigación.

Añadió MACL que su abuela declaró por estos hechos, la que observó también la presencia de una camioneta blanca, y que vio a 3 de los asaltantes huir en el jeep blanco y a otro en la camioneta que señaló su abuela.

La declaración de esta víctima, pudo ser avalada con el relato de la mencionada policía **María Pilar Sotelo Aguilera**, quien expuso que el día 5 de abril de 2019 recibió una denuncia por el delito de robo con intimidación de parte de MACL, en términos sustancialmente similares a los ya referidos, añadiendo que los sujetos, además de los logos distintivos de la PDI, portaban chalecos antibalas, entregándole las características de los sujetos y añadiendo que el hombre que esperaba afuera del domicilio hablaba por radio del tipo Handy (portátil) y que el domicilio de la víctima quedaba en el sector de Las Acacias de la comuna de Chimbarongo.

Los referidos testimonios fueron estimados creíbles, al ser concordantes entre sí y con la prueba documental correspondiente a la citada cartola bancaria, sin que sus dichos hayan sido desvirtuados por otros medios de prueba, permitiendo acreditar que, en las circunstancias de lugar y tiempo expuestas, diversos sujetos efectivamente se apropiaron sin la voluntad de su dueño de especies muebles ajenas, valiéndose para ello de la intimidación a través de lo que aparentaban ser armas de fuego; presupuestos que pueden calificarse como un delito de robo con intimidación en los términos planteados en la acusación fiscal.

Sin embargo, y en lo que dice relación con la participación del encartado, la prueba no fue suficiente para vincularlo indefectiblemente con la comisión del delito en la forma que se le atribuyó. Luego, para una mejor comprensión de los razonamientos y existiendo una misma investigación que dice relación con este delito de robo con intimidación y con la segunda imputación por el delito de robo en lugar habitado, se analizará la prueba asociada a la participación atribuida en ambos robos de manera conjunta en el apartado subsiguiente.

NOVENO: DELITO DE ROBO LUGAR HABITADO. ACREDITACIÓN DEL HECHO PUNIBLE. Como segunda imputación al acusado, se sostuvo que, en las circunstancias de tiempo y lugar consignadas como hecho 2, se habría

concertado previamente con tres sujetos no identificados, los que se hacían pasar por funcionarios de la PDI y portaban armas de fuego, a quienes les habría facilitado su vehículo tipo jeep, marca Hyundai, color blanco, con vidrios polarizados, con la finalidad que los tres sujetos ingresaran a un inmueble y sustrajeran desde su interior diversas especies mueble ajenas, sin la voluntad del dueño y con ánimo de obtener lucro.

El tribunal pudo dar por establecido el delito al ponderar las declaraciones ofrecidas por el Ministerio Público, consistentes en el testimonio de **María del Rosario Riveros Lizama**, quien señaló que un día de abril o mayo del año 2019 como entre las 12.15 a 12.20 horas del día, se encontraba en su casa, junto a su mamá y su pareja, cuyo inmueble que queda en el mismo sitio que la vivienda del afectado, que es su primo. En ese contexto, un menor de edad que estaba en el exterior de su casa, regando, le avisó que estaba la PDI en la casa del tío (víctima), por lo que salió a mirar y advirtió que venían tres personas en una camioneta blanca que tenía el logo de la PDI en un costado, quienes se bajaron del auto. Estos sujetos andaban con chaqueta negra de la PDI, le exhibieron una placa, uno de ellos andaba con pistola y le dijeron que en el mesón que estaba afuera de la casa de su familiar habían dejado una citación porque su primo debía concurrir a la PDI.

Añadió la deponente que en un primer momento no le pareció nada extraño, pero luego le llamó la atención porque uno de los supuestos policías fue “flaite” al hablar. Precisó que desde que los vieron pasar hacia la casa de su familiar que queda a unos 70 u 80 metros de distancia de su casa y habló con ellos transcurrieron 5 a 10 minutos. Luego llamó a su primo, dueño del inmueble, que se encontraba trabajando y le contó lo ocurrido, a quien a su llegada acompañaron para verificar si estaba la aludida citación, pero no estaba, por el contrario, se dieron cuenta que habían ingresado y sustraído algunas especies, entre ellas, un televisor y unas zapatillas. Agregó que los sujetos habrían entrado por una ventana porque la casa no estaba terminada y no tenían los vidrios y para entrar a las piezas rompieron las chapas de las puertas. Finalmente, declaró que no les vio el rostro, pero que uno era bajo, de pelo claro, largo, pero no tan largo; otro moreno, flaco, alto y con cara con acné; y otro moreno, no tan alto y gordito.

La versión de esta persona fue corroborada por el testimonio del propio afectado, **testigo mencionado como N° 1**, quien reconoció que aquel día se encontraba trabajando cuando una prima de nombre María, que vive a unos 70 a 80 metros de su casa, le avisó que andaban unos tipos en un jeep blanco con los que estuvo conversando y andaban vestidos de la PDI, los que supuestamente le habían dejado una citación porque debía concurrir urgente a presentarse a la PDI de San Fernando. Por tal motivo se fue enseguida a su casa, demorándose entre 15 a 20 minutos en llegar y se encontró con que le habían reventado las puertas a patadas.

Añadió que entraron por la puerta y la ventana y que tenía las piezas con las puertas con llave, las que patearon, sacando las chapas y rompiéndolas todas. Que era su casa que estaba construyéndola y que si bien aún no se llevaba a su familia a vivir, él ya se encontraba habitándola. Preciso que le sustrajeron dos pares de zapatillas marca Merrell, un televisor plasma, una ballesta deportiva, 3 poleras marca Caterpillar nuevas, lo que sumado al daño en puertas avaluó en 2 millones de pesos.

También contó que una vez que llegó a su casa relacionó el jeep blanco que le mencionaron sus familiares con el que se había topado en el camino de regreso a su casa.

De la denuncia efectuada por este afectado y su contenido dieron cuenta en el juicio los funcionarios investigadores de la PDI **Cristian Marambio Guajardo** y **Camila Castro Sazo**, en términos similares en lo sustancial, precisando **Marambio** que la denuncia se efectuó el 17 de abril de 2019.

En cuanto a que se tratara de un lugar habitado, tanto la **víctima** como su **prima** fueron contestes en señalar que si bien la casa no estaba terminada, si se encontraba viviendo en ella el afectado, al punto que le fueron sustraídas pertenencias personales, como ropa de vestir y calzado.

En definitiva, con el mérito de las aludidas declaraciones, concordantes entre sí y complementarias, dando cuenta de una secuencia de tiempo y espacio lógica y plausible, sin que se hayan advertido inconsistencias o discrepancias entre ellos ni se haya hecho ver alguna contradicción con sus relatos iniciales, se pudo dar por establecida la referida apropiación de especies muebles ajenas, sin la

voluntad de su dueño y con ánimo de lucro, las que se encontraban al interior de un inmueble que servía de habitación a la víctima y al que accedieron mediando fuerza en las cosas, en este caso al ingresar a la vivienda por vía no destinada al efecto y luego a sus dependencias rompiendo puertas interiores; todo lo cual configura el delito de robo en lugar habitado conforme se acusó por el Ministerio Público.

DÉCIMO: PARTICIPACIÓN ATRIBUIDA AL ACUSADO EN AMBOS DELITOS DE ROBO Y MOTIVOS DE LA ABSOLUCIÓN. Como ya se anticipó, el tribunal concluyó que no se pudo vincular al encartado con los dos delitos de robo por los siguientes motivos:

En primer lugar pudimos conocer durante el juicio a través de los testimonios de los policías **Cristian Marambio** y **Camila Castro**, que la forma de ligar al acusado con los dos robos habría sido a través de la información aportada por la víctima del robo del 16 de abril de 2019, denominada testigo protegido N° 1, quien a su vez por información de terceras personas del sector supo que Javier Saavedra participaba en actividades delictuales y que se rumoreaba por todos en el sector y alrededores que tenía que ver en los robos, lo que unido a la vinculación que hizo este testigo con el vehículo que observaron sus familiares llegar hasta su casa y el que él mismo observó cuando regresaba, hacía calzar todo y por eso se podía pensar que el acusado tenía participación en los robos. Dicha información fue avalada en el juicio por el **testigo protegido N° 1**, en los mismos términos, recalcando que todos sabían que Javier Saavedra, apodado “ojitos de petróleo”, tenía responsabilidad en el robo que le afectó y en otros que habían ocurrido en el sector rural de Chimbarongo.

Con esta información y existiendo elementos que daban cuenta de un posible foco delictivo al tener dos denuncias de robos con modos de operar similar, tal como lo refirieron los policías de la PDI **Cristian Marambio** y **Camila Castro**, es que se consiguieron las grabaciones de una cámara de seguridad ubicada en una zona cercana al inmueble del afectado testigo N° 1, específicamente en el Fundo Santa Berta, en cuyas imágenes se apreciaría el vehículo que habría participado en el hecho del 16 de abril y que correspondería al vehículo del acusado, lo que

permitía vincularlo también al robo del 1 de abril porque se trataría de la misma banda.

Sin embargo, la prueba aportada no fue suficiente para arribar a las conclusiones del persecutor, por el contrario, se evidenciaron inconsistencias que no encontraron explicación y que llevaron a descartar la participación atribuida en ambos robos.

En primer término, las imágenes de la cámara de seguridad recogidas desde el Fundo Santa Berta que fueron captadas el día 1 de abril de 2019, según refirieron **Cristian Marambio** y **Camila Castro**, quedaron plasmadas en el informe policial N° 3859 como pantallazos o fotograma, en los que, como pudimos apreciar, se observa la breve trayectoria de un vehículo blanco, tipo jeep, de similares características a las aludidas por la víctima del robo de ese mismo día y por la prima de la víctima del robo del 16 del mismo mes, pero a las 15:24 horas, según se observó en las **imágenes del set 11, N° 1, 4, 5, 6 y 7**, es decir, cuando habían transcurrido más de 2 horas después del horario en que los sujetos ingresaron y salieron del domicilio, que según reza la acusación, que fue entre las 12.30 a 13.00 horas, exiguo periodo de tiempo que fue concordante con la rápida dinámica de los asaltantes expuesta por el propio afectado **MACL**. Sin entregarse alguna explicación sobre el tiempo intermedio transcurrido, ya que el inmueble de la víctima quedaba a unos 3 kilómetros del fundo Santa Berta y era la única ruta para salir del lugar, conforme lo refirió **Camila Castro**, por lo que no parece razonable concluir que habiendo transcurrido más de dos horas de la ocurrencia del robo haya sido el mismo vehículo en el que huían los asaltantes el que fue avistado en las cámaras ubicadas a tan solo 3 kilómetros de distancia.

Luego, observamos que en los pantallazos o fotografías sacadas a las imágenes de las cámaras de seguridad no se podía advertir la patente del vehículo, pese a lo cual el funcionario **Cristian Marambio** afirmó que revisó las grabaciones y aun cuando “entrecortado” sí se lograba apreciar, quedando de manifiesto a través de la incorporación de las imágenes, la imposibilidad de distinguir la placa, como lo reconoció la policía **Camila Castro**, a cargo de la investigación por todos los delitos imputados al encartado, al punto que por ese motivo sugirió en su informe policial que se hiciera un peritaje técnico para poder conocer la patente del

vehículo registrado en las cámaras, lo que no se efectuó por los tiempos acotados que se tienen para la investigación, como la misma explicó.

La aludida falta de claridad de las imágenes quedó en evidencia al revisar las **fotografías N° 2 y 3 del referido set**, en las que, pese a los acercamientos, nada se apreciaba, siquiera alguno de los dígitos o letras de la patente. Se preguntó el tribunal, cómo fue entonces que vincularon el vehículo que se desplazaba dos horas después del hecho del 1 de abril de 2019 con el vehículo del acusado si no se podía ver ese elemento identificatorio.

Enseguida refirieron los policías **Cristian Marambio** y **Camila Castro** que había otro elemento distintivo del automóvil apreciado en las capturas de pantallas de las cámaras y comparativamente coincidente con el vehículo del acusado, correspondiente a un abollón o raya en la puerta del copiloto, parte inferior, según dijo **Marambio**, o una hendidura en el costado del copiloto, parte trasera, como lo dijo **Castro**, que a juicio de esta última se apreciaría en las **fotografías N° 3 y 4 del set 11** que le fueron exhibidas en el juicio. Sin embargo, ya sea por la mala calidad de la imagen o por la insignificancia del mentado abollón, raya o hendidura, lo cierto es que el tribunal nada observó.

Los demás elementos distintivos y que permitirían vincular al vehículo que pasó frente al Fundo Santa Berta con el del acusado que se apreció en las **imágenes N°8, 9 y 10 del mismo set 11**, estacionado en el interior de un taller mecánico, según refirió al serle exhibidas **Camila Castro**, serían las llantas negras, antena y vidrios polarizados, los que evidentemente venían a reforzar las características de la patente y el abollón o raya, pero que por sí solos son insuficientes al ser especies de regular presencia en cualquier vehículo.

Otro medio probatorio que el tribunal debió ponderar fueron **6 pistas de audio**, correspondientes a grabaciones de escuchas telefónicas entre el acusado y un tercer sujeto identificado como Eric Quilapi Rojas, autorizadas en el marco de la operación Hollywood, de la cual se expondrá y se analizará en relación a los siguientes hechos de la acusación.

En tales pistas se contienen los contactos telefónicos efectuados entre los días 14 de agosto y 2 de octubre, ambas del años 2019 (pistas terminadas en **0022, 0101 y 1645** y las consignadas como pista **27/09/19 10.36 hrs.; 01/10/19 18.12 hrs.** y

02/10/2019 10.28 hrs.), en las que, en lo pertinente, se oye al acusado hablar sobre lo que puede interpretarse, conforme el análisis del resto de las escuchas asociadas a las demás imputaciones, como datos de lugares para cometer ilícitos y la futura coordinación con otros sujetos. Dichas conversaciones, posteriores por cierto a la comisión de los robos de esta causa, ningún antecedente concreto entregaron en relación con los hechos de 1 y 16 de abril.

Finalmente, el persecutor pidió tener en cuenta tales conversaciones, unidas a los rumores o conocimiento que dijo tener la víctima del hecho 2 en cuanto a que el acusado, conocidamente apodado como “ojitos de petróleo”, participaba de robos y otros ilícitos en el sector, lo que todo el mundo sabía, a lo que agregó el dato de que un tercero del que la víctima no entregó información le habría dicho que sus especies sustraídas estaban en el inmueble del encartado y a la venta.

Tales antecedentes, bien pueden ser estimados como indicios de algún tipo de participación del acusado en una actividad delictual, pero se estimaron dubitados e insuficientes, aun en conjunto con el resto de la prueba ya analizada, para atribuirle participación en los precisos hechos de la causa, ya que se requiere contar con prueba suficiente, completa, certera y que permita alcanzar la convicción de condena, más allá de toda duda razonable, como lo exige el legislador, de que Javier Saavedra Muñoz se haya concertado previamente con terceros no identificados, facilitándoles su vehículo para cometer tales delitos de robo, sin que tampoco se haya acreditado alguna otra forma distinta a la autoría, por lo que se decidió absolverlo por ambos delitos, prevaleciendo a su favor la presunción de inocencia.

UNDÉCIMO: TENENCIA ILEGAL DE MUNICIONES. ANÁLISIS DE LA PRUEBA Y MOTIVOS DE LA ABSOLUCIÓN. Antes de entrar al análisis específico, es necesario señalar cómo es que se origina toda la investigación en contra del acusado y otros sujetos, lo que fue ampliamente detallado por los funcionarios **Cristian Marambio Guajardo** y **Camila Castro Sazo**, esta última a cargo del caso. Ambos expusieron de manera conteste en el juicio que todo comienza a raíz de las dos denuncias por robo (hechos 1 y 2) de la cual tomaron conocimiento y específicamente al advertir coincidencias en el modo de operar de sus autores, un grupo de sujetos que se hacían pasar por policías de la PDI e

incurrían en la comisión de tales delitos, en un sector determinado de la comuna de Chimbarongo, señalando una de las víctimas que se sindicaba por muchas personas del sector que el sujeto apodado “ojitos de petróleo”, que corresponde a Javier Saavedra, tenía participación. Por lo anterior se interceptó su móvil y a través de las escuchas telefónicas es que se llegó a identificar a otros individuos con los que el acusado tendría vínculos delictivos, luego de lo cual se llevaron a cabo las entradas y registros a 7 domicilios, entre ellos, al correspondiente al acusado y su padre.

Luego, conforme se desprende del tenor del hecho consignado como N° 3 de la acusación, se atribuyó a Javier Saavedra el hallazgo efectuado el día 14 de octubre de 2019 de 48 municiones o balas, calibre 9 milímetros, en el que sería su domicilio ubicado en el sector San Agustín, sitio N° 26 de la comuna de Chimbarongo. En dicho lugar la Policía de Investigaciones debidamente autorizada, en el contexto del operativo policial llamado “Hollywood”, ingresa a eso de las 6.30 horas de la mañana y encuentra en su dormitorio, además de las municiones, la suma de \$473.000 en dinero efectivo, 31 cartuchos de escopeta, un cargador de arma, un rifle marca Gamo y dos balines. Asimismo, pero en el dormitorio de su padre Héctor Saavedra, con quien vivía el encartado, se halló una escopeta, serie 9600883.

Enseguida cabe señalar que el acusado no tenía autorización para tenencia o porte de armas de fuego y/o municiones, como se acreditó con el **oficio de la Autoridad Fiscalizadora de San Fernando 11 de noviembre de 2019** y que la escopeta encontrada en el dormitorio del padre del encartado, se encontraba debidamente inscrita a su nombre, pero sin haberse registrado el cambio de dirección, pues se autorizaba su tenencia para un domicilio de la comuna de Maipú; como lo sostuvieron los funcionarios policiales **Guajardo Marambio** y **Castro Sazo** y se corroboró a través del mismo **oficio aludido**.

A continuación referir que hubo ciertos aspectos que no resultaron controvertidos, como que en el sitio N° 126, había dos viviendas, una terminada y otra en construcción, lo que igualmente fue avalado por los **referidos policías**. Además, que aquel día únicamente se encontraba en el domicilio en el que fueron halladas las especies -el que estaba terminado- el padre del encartado, y que el

acusado se encontraba desde el día anterior (13 de octubre) en Santiago, como también lo contaron los mentados **policías** y fue coincidente con lo que sostuvo en este punto el acusado.

Relevante también resulta aclarar que, sin perjuicio que el Ministerio Público imputó a Javier Saavedra la propiedad de 31 cartuchos de escopeta, un cargador de arma, un rifle marca Gamo y dos balines, solo mantuvo la acusación por las **48 municiones**, las que fueron remitidas a través de cadena de custodia NUE 5187396, según expuso **Guajardo Marambio** y recibidas por el perito balístico de Labocar, **Patricio Alejandro Muñoz Cruz**, el que las examinó y concluyó que se trataba de 48 cartuchos 9 por 19 mm., de diferentes marcas, de los cuales 5 de ellos fueron sometidos a prueba de disparo y se pudieron obtener resultados positivos, es decir, 5 vainas testigos y 5 proyectiles balísticos testigos, utilizando para dichas pruebas un arma de cargo fiscal, pues las demás evidencias no eran compatibles con el calibre, de lo que se pudo determinar que las municiones estaban en buenas condiciones de uso y aptas para ser usadas en un armamento compatible con su calibre, es decir, una pistola, ergo, los cartuchos eran aptos para ser disparados por un arma de fuego.

Entonces, lo esencialmente controvertido resultó ser la vinculación de dichas municiones con el acusado, pues la defensa sostuvo, por una parte, que las municiones no le pertenecían a su representado, y, por otra, que, conforme los dichos del padre del acusado, los policías habrían dejado dichas especies en el inmueble una vez concluida la diligencia de allanamiento, regresando más tarde al inmueble cuando el padre estaba detenido y nadie había en el domicilio.

Para resolver el punto de controversia y acreditar la imputación, el persecutor incorporó como medios de prueba el testimonio de dos de los policías que participaron de la diligencia de entrada y registro efectuada el 14 de octubre de 2019, cerca de las 6.50 de la mañana, **Cristian Guajardo y Camila Castro**, quienes de manera conteste expusieron que en el registro de la casa color rojo, que era la que estaba terminada en su construcción, se encontró en el dormitorio que era el de Javier Saavedra, específicamente en una cómoda, entre las ropas, 48 municiones calibre 9 mm., en un closet un frasco metálico con \$380.000 en diversos billetes y a su costado el carnet de identidad del mismo. Además, en otro

dormitorio que no fue asignado a nadie una escopeta calibre 12 inscrita a nombre del padre del acusado y en otro dormitorio 31 municiones de escopeta, calibre 12.

Ambos policías sostuvieron que se concluyó que el dormitorio en el que estaban las 48 municiones le pertenecía al encartado porque estaba su cédula de identidad y también porque su papá, Héctor Saavedra, quien fue detenido por la tenencia de la escopeta inscrita a su nombre, pero con otro domicilio, también lo había señalado.

Con estos antecedentes probatorios, el tribunal tuvo en cuenta que, el principal elemento incriminatorio que tuvieron los funcionarios que participaron de la entrada y registro efectuada en el domicilio, en el que se acreditó vivían el padre del encartado y según el persecutor también este último, fue la circunstancia de haberse hallado en uno de los tres dormitorios la cédula de identidad del acusado, específicamente en la parte superior de un ropero, la que según dijo Camila Sazo, se habría fotografiado y levantado como evidencia, pero nada se supo de aquello en el juicio, como lo hizo ver la defensa. Sin perjuicio de aquella omisión y dando por cierto que se encontró el documento en un dormitorio, conforme lo señalaron de manera categórica ambos PDI, lo cierto es que se estimó insuficiente este hallazgo para vincular ese dormitorio con el encartado y enseguida con las municiones, ya que no se dio cuenta de la existencia de otras especies que pudieran pertenecer al acusado, como por ejemplo, prendas de vestir, calzado, u otros artículos personales, que regularmente existen en los dormitorios, limitándose Guajardo Marambio a señalar que las municiones se encontraron en un cajón de una cómoda entre “ropas”, concepto indeterminado en cuanto a qué tipos de prendas eran y menos su usuario o propietario, de modo que por lo impreciso no pudo vincularse a Javier Saavedra.

El otro antecedente que consideraron los funcionarios policiales fue que Héctor Saavedra, padre del encartado, les habría indicado que el dormitorio en el que encontraron las 48 municiones era del acusado, sin embargo, de ello no quedó registro alguno, justificando ambos policías que lo dijo de manera libre y espontánea y por eso no quedó registro de sus dichos. Dicha falta de registro fue determinante porque Héctor Saavedra fue presentado en el juicio como testigo y negó haber señalado aquello.

Los antecedentes referidos por Guajardo y Castro, por las falencias advertidas, se estimaron insuficientes para vincular indubitadamente al acusado con el dormitorio, cobrando relevancia el hecho que el acusado no estaba en la vivienda aquel día, teniendo conocimiento los policías que la noche anterior al allanamiento el acusado se encontraba en Santiago, tal como lo dijeron. Además, regularmente se movilizaba en vehículo y por tanto es lógico pensar que portaba sus documentos personales y entre ellos su carnet de identidad, entonces es dable preguntarse qué fue lo que encontraron los policías, pudiendo ser una copia o una cédula vencida, lo que no supimos porque no se contó con la evidencia o una imagen de la misma. Asimismo, en el inmueble había más dormitorios y vivían otras dos personas, el padre y la madre del encartado, los que eran visitados regularmente por sus otros hijos, tal como lo expuso Héctor Saavedra.

La duda sobre quién guardaba o tenía en su poder las municiones aumenta al considerar que en el sitio había dos inmuebles, uno terminado en el que se hicieron los hallazgos y otro de 2 pisos en construcción, pero que solo tenía terminado el primero de ellos, en el que sostuvo el padre del acusado que este vivía, pero no se encontró ninguna especie de interés criminal.

En definitiva, no habiendo estos sentenciadores alcanzado la convicción de que el dormitorio en el que fueron encontradas las 48 municiones haya pertenecido al acusado, se debió absolver, prevaleciendo la presunción de inocencia a su favor.

DUODÉCIMO: ASOCIACIÓN ILÍCITA. ANÁLISIS DE LA PRUEBA Y MOTIVOS DE LA ABSOLUCIÓN. Antes de entrar de lleno a la ponderación de la prueba en este capítulo, es necesario señalar que el Ministerio Público imputó a Javier Saavedra Muñoz la comisión del delito de **asociación ilícita**, contemplado en el artículo 294 en relación al 292, ambos del Código Penal, es decir, considerando que los fines de la asociación serían amplios y no restringidos a materias de la Ley 20.000, como lo aclaró el fiscal durante el juicio, es decir, en este punto también se incluía la comisión de delitos de robo.

Dicho ilícito, contiene una descripción típica amplia, como se advierte de la lectura del artículo 292 del Código Penal, que prescribe que *“Toda asociación formada con el objeto de atentar contra el orden social, contra las buenas costumbres, contra*

las personas o las propiedades, importa un delito que existe por el solo hecho de organizarse”.

Para dotar de contenido a este tipo penal, ha debido la doctrina y jurisprudencia determinar los elementos o requisitos para su configuración, existiendo consenso en cuanto a que debe tratarse de una agrupación, idealmente de tres o más personas (aunque nada obsta a que sean dos, pero es más complejo hablar de estructura y distribución de funciones); que manifiesten su ánimo y voluntad de asociarse con el objeto de delinquir, lo que resulta relevante porque se consuma por el solo hecho de constituirse; debiendo sus miembros para alcanzar tal propósito, coordinarse y organizarse en el cometimiento de las funciones; que se proyecten en el tiempo, lo que implica que la agrupación no tenga fecha de término o nazca para un determinado y ocasional objetivo, como sería el caso de un grupo de personas que puntualmente se ponen de acuerdo para la ejecución de un particular delito.

Es decir, se trata de una agrupación de personas con cierta organización entre sus miembros, con distribución de roles y jerarquía de mando definida, que adhieran a un propósito delictivo común, asimilable a una “red criminal” que ponga en riesgo el bien jurídico de tranquilidad pública o Poder del Estado, al punto que se considera un delito autónomo de los objetivos ilícitos particulares que puedan concretar.

Así también lo ha establecido la Excma. Corte Suprema en sentencia en causa ROL 14.312-2016, de fecha 29 de diciembre de 2016 en la que sostuvo: *“En efecto, la configuración de la asociación ilícita requiere construir una estructura con ciertas particularidades objetivas, las que se pueden concretar en la concurrencia de una pluralidad de sujetos activos que formen cuerpos permanentes, organizados jerárquicamente, con reglas propias, que tienen por fin la comisión de ilícitos establecidos por ley. Se trata entonces, de una colectividad delictiva, cuyo método es penalmente antijurídico, en el que las relaciones entre los componentes del sistema, en particular las personas, se hallan funcionalmente vinculadas para fines criminales, y como mecanismo de injusto tienen una dimensión institucional de ser antisocial, lo que hace de ella no solo algo más que la adición de sus partes, sino también algo independiente de esa sumatoria, y es en ese plano donde radica su diferencia específica con respecto a las meras agrupaciones coyunturales para*

delinquir, del mismo modo que su funcionalidad delictiva la diferencia de otros regímenes sociales. Así, la asociación criminal comprende todos los supuestos en que dos o más sujetos elaboran en común un proyecto delictivo, conforme con un programa criminal o medios eficientes para desarrollarlo, más allá del simple acuerdo de voluntades”.

En la especie, conforme se desprende del hecho N° 3 consignado en la acusación, Javier Saavedra habría mantenido contacto con Juan Antonio Osorio Jorquera, alias “El Coipo”, quien sería su mano derecha y brazo operativo para la venta de droga ilícita, la que en su mayoría era traída desde Santiago, siendo su proveedor principal Elías Catalán Reyes, alias “El Nano”. Además, Javier Saavedra mantendría vínculos con Eric Quilapi Rojas, alias “El ratón o laucha”, con quien gestiona información para la planificación de robos e incluso comercialización de drogas. Igualmente, Javier Saavedra, apodado “Ojitos de petróleo”, mantenía nexo, vínculo y relación con Rodolfo Jiménez Medina, alias “El Gato”, el que compraba y adquiriría droga ilícita directamente de parte de Javier Saavedra y en algunos casos a través de Juan Osorio.

Por otro lado, Javier Saavedra mantendría vínculos de relación y nexo con Carlos Alcaino Alcaino, alias “El loco Tito”, el que lo ayudaba a vender drogas y también en la elaboración de dosis y preparación de la droga, lo que se conoce como “cocinar y secar la droga”. Asimismo, Javier Saavedra mantendría nexo, vínculo y relación delictual con Sandra Lira y su grupo familiar compuesto por su tío Ladislao Lira Torres, su hijo Sebastián Salgado Lira y su sobrino Eduardo Lira Ibáñez, todos los que compartirían un mismo domicilio.

Todo lo anterior, según el Ministerio Público tendría una estructura y dinámica criminal.

Continúa la acusación entregando un detalle pormenorizado del resultado de los allanamientos en cada uno de los domicilios de los referidos terceros y de los hallazgos en los mismos.

De la sola lectura del hecho 3 de la acusación, cuya comprensión no resulta simple, como lo destacó la defensa, debe entenderse que todos los aludidos terceros, en conjunto con el acusado, formarían una agrupación en la que se encontrarían concertados y organizados para la comisión de delitos de robo y de venta de drogas.

Luego, teniendo claro el marco legal y fáctico, corresponde analizar la prueba aportada por el persecutor, comenzado por las declaraciones de **Cristian Marambio Guajardo** y **Camila Castro Sazo**, funcionarios de la PDI, quienes señalaron que, en el marco de lo que denominaron operación Hollywood y con motivo de la investigación de los delitos de robo ya analizados en esta sentencia, donde obtuvieron autorización judicial para diligencias intrusivas, conocieron a través de escuchas telefónicas realizadas entre julio y octubre de 2019, los contactos que mantuvo el acusado con Eric Quilapi Rojas, Elías Catalán Reyes, Juan Osorio Jorquera, Rodolfo Jiménez Medina y Carlos Alcaíno Alcaíno, además, con una hija de Sandra Lira. Para lograr la interceptación telefónica obtuvieron el número del teléfono del celular del acusado a través de su página de Facebook, de acceso público.

Fue así que **Camila Castro** explicó que el acusado durante todo el período de escuchas telefónicas, que se extendió por 3 meses, sostuvo conversaciones con Eric Quilapi, de las que se tomó conocimiento a través de la difusión de **6 pistas de audio incorporadas**. La primera pista correspondiente al 14 de agosto (150820190022), luego el 15 de agosto (150820190101), el 17 de agosto (170820191645) el 27 de septiembre a las 10.36 horas, el 01 de octubre a las 18.12 horas y la última el 2 de octubre a las 10.28, todas del año 2019. De las **tres primeras escuchas** señaladas se desprende, tal como lo explicó la **funcionaria Castro**, que Eric Quilapi le consulta a Javier Saavedra por lo que serían datos de lugares en los que pudieran obtener objetos de valor, dinero e incluso drogas, haciendo alusión Quilapi a que se encontraba con problemas de salud y que no podía participar, pero que “mis compañeros no te van a cortarte la mano” (sic), es decir, podían hacer el trabajo sin poner en riesgo a Saavedra, que era quien podía conseguir datos, pero a través de su primo. Si bien no se señala el nombre de este primo, se colige que se trata de Juan Osorio, único primo con el que se estableció durante el juicio que el acusado mantenía contacto permanente por motivos lícitos e ilícitos, como lo señaló la **funcionaria**.

En las **restantes conversaciones**, de las que también dio cuenta la encargada del caso **Camila Castro**, Quilapi nuevamente le pregunta a Saavedra por algún dato ante la necesidad de conseguir o hacerse de dinero, señalando Saavedra que

era un tercero quien tenía información, “un loco que vive frente de mi casa tiene la movía”, y que se trataría de marihuana cultivada, sin embargo en la última de las conversaciones Saavedra le dice a Quilapi que no les conviene porque “es semi raza la gueá” y su precio de venta no le satisfacía.

De estas conversaciones se pudo conocer también que Saavedra mantenía otro teléfono, cuyo número que no fue posible ubicar en la investigación, pues en la escucha del 14 de agosto, Saavedra le dice a Quilapi que le comparta a los compañeros de este último el mismo número de teléfono por el que se estaban comunicando y “no el otro”. Luego, el 17 de agosto, Saavedra le dice a Quilapi que el otro teléfono lo va a prender durante el día y Quilapi queda de llamarlo a ese “otro número”. La existencia de ese otro número de teléfono de Saavedra y que era solo conocido por algunos, fue corroborado a través de la conversación que sostuvo aquel con la hija de Sandra Lira, de nombre Estefanía Salgado, los días 12 y 14 de agosto, conforme a las pistas **120820192252** y **140820192215**, en las que se hacía mención a que el acusado acababa de hablar con Sandra Lira, pero desde el otro teléfono. Lo anterior ya daba cuenta que había temas que Saavedra trataba con mayor sigilo.

Otra de las diligencias asociadas a Eric Quilapi, cuyo objetivo era ligarlo a Javier Saavedra, y en definitiva, a la asociación ilícita planteada por el persecutor, fue el allanamiento que se efectuó a su domicilio, de la que dio cuenta **Camila Castro** y fue corroborada por el funcionario de la PDI que participó en la entrada y registro del inmueble el 14 de octubre de 2019, **Marco Antonio Venegas Contreras**. Este funcionario contó en el juicio que ingresó al domicilio ubicado en calle Afluente N° 2501, depto. B-33, comuna de Peñalolén, en cuyo interior se encontraba Eric Quilapi y su pareja, encontrando en el dormitorio principal, debajo de la cama, un revólver, calibre 22, marca Llama, serie N° 715035, sin municiones, por lo que quedó detenido el sujeto a causa de la tenencia del arma de fuego, sin mantener documentos ni autorizaciones. Además, indicó que el arma se encontraba registrada a nombre de un tercero, con domicilio en otra comuna, la que no tenía encargo por robo y que Quilapi señaló había adquirido en el comercio ilegal.

Con el mérito de las escuchas telefónicas, se pudo acreditar el contacto que existía entre el acusado y Eric Quilapi, el que a su vez también conocía a Elías Catalán, como se desprende de la pistas de audio **150820190101** y de la pista del **13 de octubre de 2019 a las 22.23 horas**, pues en la primera Quilapi y Saavedra mencionan que pueden reunirse en el carro de “Don Nano” y en la segunda se escucha a Saavedra decirle a su hermano Claudio, que se encontraba en la casa de Don Nano y que recién se había ido El laucha, apodos que correspondían a Elías Catalán y Eric Quilapi, respectivamente, como lo pudieron determinar los policías **Marambio y Castro** durante la investigación.

De los medios de prueba señalados precedentemente se pudo acreditar que Javier Saavedra y Eric Quilapi se contactaban con el objeto de hablar de datos sobre lugares en los que hacerse de especies de valor, vinculación que resultó insuficiente para estimar que estaban organizados y coordinados entre sí para la comisión de delitos de robo, pues fueron contactos ocasionales, desarticulados, sin muestras de una mínima organización o distribución de roles, salvo que hubo coincidencia en cuanto a que los datos los conseguía Saavedra de parte de terceros, quedando también claro que el primero de los datos era para ser ejecutado por sujetos distintos a Quilapi (sus compañeros) y sin nexos acreditados con Saavedra.

A lo anterior se unió que tampoco se pudo ligar a Quilapi con la organización o participación en los delitos de robos de los hechos N° 1 y 2 de la acusación, en los que también se atribuía participación al encartado. En el mismo orden de ideas, tampoco se pudo ligar, tal como se razonó anteriormente, que el propio acusado Saavedra haya tenido algún tipo de vínculo con alguno de los sujetos que cometían los robos o bien que alguno de su “grupo” los tuviera.

Ahora, es cierto que no es requisito para estar en presencia de una asociación ilícita, que se haya concretado la comisión de un ilícito, pues el delito se consume por el solo hecho de constituir una sociedad o empresa delictiva, sin embargo, del mérito de los contactos telefónicos entre Quilapi y Saavedra, se desprende que hubo traspaso de datos de lugares en los que conseguir dinero o especies de valor e incluso droga, pero se trataba de información imprecisa, indeterminada, y no verificable, y de haberse concretado en un delito habría ello servido de prueba indiciaria, a su vez, de la existencia de tal organización.

Tampoco se acreditó que el acusado haya exteriorizado su voluntad de trabajar organizadamente con Quilapi, es decir, con tareas o roles definidos entre ellos ni en relación a los demás sujetos que se señalan en la acusación como involucrados en una asociación ilícita.

A continuación y respecto de la relación delictual existente entre el encartado y Sandra Lira y su grupo familiar compuesto por su tío Ladislao Lira Torres, su hijo Sebastián Salgado Lira y su sobrino Eduardo Lira Ibáñez, y que conforme lo indicó **Camila Castro** -pues en la acusación no se expresa- consistiría en que Sandra Lira le facilitaría a Saavedra vehículos y armas para la comisión de los delitos de robo, el persecutor incorporó el testimonio de la **testigo de identidad protegida N°2 o también llamada 004**. Esta dio cuenta que en mayo de 2019 fue víctima de un robo en su domicilio por sujetos que simulaban ser de la PDI y que decían andar en busca de droga, agregando que en el sector donde vive -San Enrique- es conocida por vender droga Sandra Lira, a quien observaba habitualmente en el domicilio de Juan Osorio (primo del acusado) junto a éste, un hijo de ella y el encartado, creyendo que lo hacían por el negocio de la droga, lugar que era conocido por la venta de estas sustancias, hasta donde veía llegar personas en vehículos o en bicicleta a comprar.

Dicho testimonio fue avalado por **Marambio Guajardo**, quien durante la investigación tomó declaración a la testigo 004, la que dijo vivir hace más de 20 años en el sector, y que muy cerca de su casa vivía Juan Osorio, conocido traficante del lugar, a quien se lo vinculaba como soldado de Juan Saavedra. Explicó este policía que la testigo tenía miedo de declarar, a la que se llegó a través de una tercera persona que entregó información en la oficina de Senda Previene de Chimbarongo, como también lo sostuvo **Castro**.

A su turno, la PDI **Camila Castro**, indicó que otro antecedente que tuvieron en cuenta para el nexo propuesto fue el contacto telefónico que el acusado sostuvo con la hija de Sandra Lira, de nombre Estefanía Salgado Lira, lo que el tribunal pudo conocer a través de la incorporación de las pistas de audio **120820192252** y **140820192215**. De estas pistas se desprende que en la primera conversación Saavedra necesita trasladar tres electrodomésticos que le habían vendido y coordinan en qué tipo de vehículo podían caber y que al día siguiente Sandra Lira

le iba a pasar un furgón grande, además, Saavedra le dice a la mujer “pa que me dejé lo que tú me vas a guardar en la camioneta”. En la segunda conversación es la mujer quien llama a Saavedra y le pregunta si lo había llamado su mamá, respondiendo Saavedra que recién lo había llamado y que le dijo que el Juano, - como llamaba a su primo Juan Osorio- estaba en la casa, además, Saavedra le dice a la mujer que “la ésta estaba en la casa del Juano” y que los tiros también los había llevado.

Sobre estas dos conversaciones **Camila Castro** explica que Sandra Lira le facilitaba vehículos y armas a Saavedra y que lo haría a través de la hija, que obraba como intermediaria, porque nunca se escuchó a Saavedra hablar directamente con Sandra Lira, contacto que mantendrían a través del otro teléfono que mantenía aquel para fines delictuales. Sostuvo también que la conclusión anterior se veía avalada por los hallazgos encontrados en el inmueble de Sandra Lira a raíz del allanamiento efectuado por compañeros de la PDI. En dicho procedimiento fueron incautados, el 14 de octubre de 2019, una gran cantidad de especies de interés criminal, que detalló, entre ellas, 12 millones de pesos en dinero en efectivo, asociado al pago de droga al menudeo, droga y armas de fuego y fantasía.

De dichos hallazgos también dio cuenta el policía **Cristian Marambio**, quien expuso que no participó personalmente en la diligencia de allanamiento, pero tomó conocimiento de él, detallando que en el lugar se encontró droga de distinta naturaleza, armas de fuego y fantasía, además de dinero en efectivo y que en el mismo sitio había 3 inmuebles, resultando detenidos aquel día Sandra Lira, dos de sus hijos y un tío.

Es menester dejar claro que en la acusación no se señala de qué forma se configuraría la relación delictual entre Sandra Lira y sus familiares y el acusado y que daría lugar a la asociación ilícita de manera directa y exclusiva con el acusado o en conjunto con los demás sujetos mencionados en la acusación, siendo necesario que **Camila Castro** explicara en el juicio en qué consistía el nexos, que, como se dijo anteriormente, era la facilitación de insumos para cometer los delitos de robos, específicamente, vehículos y armas, omisión o indeterminación que no fue alegada por la defensa, señalando solamente que la acusación no era clara.

Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal concluyó que la prueba aportada no fue suficiente para acreditar el vínculo propuesto por los investigadores, pues no se pudo establecer ninguno de los requisitos del delito imputado.

Fue así que no hubo prueba directa, tampoco indicios suficientes, de que Saavedra y Sandra Lira se hayan puesto de acuerdo en agruparse con la finalidad de cometer delitos, ya que de la dubitada conversación telefónica entre la hija de Lira y el acusado, si bien puede desprenderse que algo ocultaban, pues hacían mención a que no estaba “la ésta” o dejar “lo que me vas a guardar” en tal parte, dicha conversación admite más de una interpretación, sin que se haya visto refrendada la conclusión de Castro con otros medios de prueba. Luego, los hallazgos en el domicilio de Sandra Lira pueden asociarse con el delito de tráfico, pero sin que haya habido elementos de prueba suficientes para hacer el nexo con el acusado, pues, además de las conversaciones entre la hija de Lira y el acusado, solo se contó con los dichos de la testigo 004, quien sostuvo que observó a Sandra Lira junto al acusado en el domicilio de Juan Osorio, primo y sujeto con estrecho vínculo con el acusado.

En definitiva, tales medios de prueba por lo vago, general y ocasional, no resultaron idóneos para estimar que entre encausado y “el clan Lira” como se le denominó en el juicio, había concierto para la comisión de delitos, menos aún, que haya habido algún tipo de organización entre ellos.

Siguiendo con el análisis, conforme se señala en la acusación, entre el acusado y Rodolfo Jiménez existiría una relación de vendedor a comprador de drogas, ya sea directamente o a través de Juan Osorio, lo que de inmediato deja fuera la posibilidad de una agrupación ilícita, pues cada uno de ellos tenía intereses individuales e independientes del otro.

De otra parte, se consigna en la acusación que Javier Saavedra tendría como mano derecha y brazo operativo a Juan Antonio Osorio Jorquera para la venta de droga ilícita, la que en su mayoría era traída desde Santiago, siendo su proveedor principal Elías Catalán Reyes, y mantenía también vínculos de relación y nexo con Carlos Alcaíno Alcaíno, el que le ayudaría en la venta de drogas como en la elaboración de dosis y preparación de la droga, lo que se conoce como cocinar y secar la droga. Al respecto es importante recordar que el fiscal sostuvo que la

imputación era por el delito previsto en el artículo 292 del Código Penal, es decir, una asociación criminal con fines amplios, no restringidos a delitos de la ley de droga y, en subsidio, solicitó que se acogiera la agravante contemplada en el artículo 19 letra a) de la Ley 20.000. Hecho el alcance anterior, y sin perjuicio de lo que se detallará cuando se analice la decisión condenatoria por el delito de tráfico ilícito de drogas, nuevamente, conforme la ponderación de la prueba de cargo, el tribunal no advirtió que se haya podido acreditar los requisitos del tipo penal, ya que el nexo acreditado entre Saavedra y Osorio y entre Saavedra y Catalán, y el conocimiento recíproco que tenían Catalán y Osorio de la existencia del otro, fueron considerados insuficientes, pues eran vínculos inconexos entre ellos. Menos aún que su cercanía era para cometer delitos más o menos determinados. Ahora, cierto es que podemos hablar de una asociación integrada solo por dos sujetos, siendo lo ideal que el número de integrantes sea mayor a tres para poder diferenciar los roles y funciones inherentes a una sociedad con fines criminales y no meramente coyuntural o casual, pero tampoco se contó con prueba para considerar que, de manera independiente el acusado, ya sea con Osorio o Catalán, haya manifestado su ánimo de organizarse de manera estable con la finalidad de comercializar droga, ya que de las pistas de audios que contienen las conversaciones entre el acusado y aquellos, queda claro que mantenían relaciones destinadas a conseguir propósitos personales y no como agrupación, sin la presencia de un líder, estructura jerárquica ni distribución de funciones.

A su vez, no fueron tampoco determinantes el resto de los vínculos que se establecieron en el juicio entre el acusado, Elías Catalán y José Osorio, para estimar que haya existido una asociación ilícita en los términos que exige el artículo 16 de la Ley 20.000, sin perjuicio de lo que se señalará a continuación en relación a la imputación por el delito de tráfico.

En relación al nexo que mantendría Saavedra con Carlos Alcaino Alcaino, solo se pudo acreditar por intermedio de **dos escuchas telefónicas**, en las que se hacía referencia a su apodo y a la calidad de consumidor de droga, de modo que no puede hablarse que hayan tenido siquiera algún fin en común, sin que el hallazgo en su domicilio de una sustancia vegetal, que resultó ser marihuana, del que dio cuenta la PDI **Cecilia Molina Zapata**, aportara para una conclusión en

contrario. La referida naturaleza de la sustancia incautada se estableció a través de la incorporación del Protocolo de Análisis Químico N° 2395, en la que se concluye que la muestra corresponde a marihuana, lo que se vinculó al Oficio N° 666 de 14 de octubre de 2019 y al Acta de Recepción N° 2096/2019 en los que se detalla que el peso bruto de toda la sustancia corresponde a 129.3 gramos, a lo que se adjuntaron los dos respectivos Informes de Efectos y Peligrosidad y dos Anexos de Pureza.

En definitiva, no se pudo acreditar la configuración del delito de asociación ilícita en el que el encartado tuviera alguna intervención criminal acorde a lo propuesto en la acusación.

DÉCIMO TERCERO: TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ANÁLISIS DE LA PRUEBA Y MOTIVOS DE LA CONDENA. Para alcanzar la decisión de condena por el ilícito en comento se tuvo en cuenta que la prueba de cargo resultó idónea y suficiente para establecer que Javier Saavedra Muñoz se dedicó a la comercialización de droga entre los meses de julio y octubre del año 2019 en la comuna de Chimbarongo, en los términos que prevé el artículo 3° de la Ley 20.000.

Tal conclusión se sustentó sobre la base de un sin número de elementos probatorios, que permitieron determinar el *modus operandi* que desplegaba el encartado para la comercialización de droga a terceros, como se le imputó por el persecutor.

En primer lugar, se pudo conocer a través del relato de **Cristian Marambio** y **Camila Castro**, que en el contexto del operativo policial llamado Hollywood, se logró dar con el nombre de Javier Saavedra, apodado “ojitos de petróleo” y “Chiqui”, al que se vinculaba con la participación en delitos de robo, logrando una autorización judicial para que se interceptara su teléfono, a partir de lo cual, y a través de escuchas, se conoció la arista de venta de drogas.

Dentro de aquella operación, se dio cuenta por los **referidos policías** que se hicieron llamadas telefónicas entre Saavedra y un sujeto al que lograron identificar como Elías Catalán Reyes, con domicilio en la comuna de Maipú, exsuegro del acusado, precisando **Castro** que mantenían vínculo permanente, al punto que el día anterior al allanamiento que posteriormente se pudo realizar, Saavedra se encontraba en el domicilio de Catalán. Dicho sujeto, era su proveedor de clorhidrato de cocaína y otras drogas, lo que fue coincidente con los hallazgos

efectuados en su inmueble, de los que dio cuenta en detalle el PDI **Felipe Valladares Catrileo**.

Para avalar los dichos de **Camila Castro**, en especial la relación que ligaba a Saavedra y Catalán y que Saavedra concurría hasta su domicilio, lo que igualmente fue reconocido por el acusado, quien dijo que había una niña que los unía, porque era el abuelo de su hija, se pudo escuchar la **pista de audio del 13 de octubre de 2019 a las 22.23 horas**, en la cual Saavedra le señala a su **hermano Claudio Saavedra**, que se encontraba aquel día en la casa de Don Nano, como también lo explicó la **funcionaria**.

Además, pudimos oír una conversación sostenida entre el acusado y Rodolfo Jiménez, sujeto que se acreditó compraba con regularidad droga a Saavedra, como lo señaló **Camila Castro** y se avaló con el **relato del propio comprador**. En dicha conversación del 18 de agosto de 2019, Saavedra le dice a Jiménez, que su suegro “le había dado la media mano”, lo que en jerga delictual implica que le había pasado droga, como lo indicó la funcionaria a cargo del caso. Además, se escuchó a Saavedra decir, *“te lo digo pa’ que hagai plata y te la paso tal cual”*, lo que quería decir que le entregaba la droga sin “patearla” o abultarla, como también lo explicó **Castro**.

La relación de abastecedor de droga de Elías Catalán respecto de Javier Saavedra se reforzó a través de las escuchas telefónicas pesquisadas el día 7 de agosto de 2019, la que resulta ser concordante con lo que días después Saavedra le contó a Rodolfo Jiménez, conforme se pudo escuchar en las **pistas 070820191942 y 070820194501 que fueron explicadas Camila Castro**. En ambas pistas, se oye una llamada sucesiva, que se transcriben en lo medular para una mejor comprensión:

Catalán: *“...ayer fui a Iloca a buscar unos pescados allá, es barato comprar allá”*.

Saavedra: *“...el domingo voy a ir a ver a la Máxima -su hija- pa’ pasar a verlo al carro....bueno si hay que invertir compramos no más”*.

Catalán: *“Si po’, si vamos a tener que hacer algo porque, por ejemplo ahora, le apliqué otro aliño y quedó bien, le coloqué más o menos como la mitad y queda bien, así que ahí vamos a ver qué es lo que hacemos para sacar esa cuestión”*.

Saavedra: *“si po’ yo esa misma cuestión estaba hablando con el Juan pa’ invertir acá, pa’ que la saquemos no más, así que el domingo voy a ir pa’ allá con el Juano”*.

Catalán: *“vale”*.

Saavedra: *“pa’ traerme altiro algo del negocio pa’ acá”*.

Del mérito de esta conversación se desprende, tal como lo concluyó **Castro**, que hacían referencia al abultamiento de droga al mencionar la aplicación de aliño, y que Saavedra la iba a ir a buscar donde Catalán para invertir, refiriendo que se traía el negocio.

En relación a esta conversación el acusado explicó que hablaban del negocio de los pescados, porque su exsuegro tenía un carro de pescados y andaba comprándolos en Iloca y después él los iba a buscar a Maipú y se los traía a Chimbarongo. Además, que al decir lo del aliño, Catalán, se refería a que el cebiche quedaba igual de rico con hartos aliños porque no le tenía fe al cebiche de tiburón, solo que había que echarle más limón y más aliño y quedaba igual de bueno. Igualmente dijo que al cebiche que hacía le echaba mitad de pescado y mitad de jibia para que abundara.

Sobre este punto la defensa incorporó **6 fotografías**, que fueron sacadas del perfil de Facebook del acusado, en las que aparecen imágenes de platos de cebiche y una publicidad de “Ceviches J y M”, algunas de las cuales estaban fechadas en mayo o junio de 2017, es decir, no coetáneos a la época de las escuchas telefónicas.

El tribunal no estimó creíble esta explicación del acusado, así como tampoco la de los restantes audios, conforme el análisis conjunto de toda la prueba de cargo, de la que queda clara la forma ambigua y coincidente de hablar de Saavedra y los demás involucrados, omitiendo hacer referencia a conceptos claves, como se verá de manera prístina en el análisis de las demás escuchas. Además, no resultar lógico que, si hablaban en esta ocasión como en las otras, de una actividad lícita como propone el acusado, no se hayan ocupado los sustantivos asociados a las preparaciones culinarias de las que dice que hablaban o de las actividades laborales.

La interpretación de esta escucha, entregada por **Castro**, además de razonable, resultó concordante con los efectivos hallazgos de droga en el domicilio de Catalán; con la conversación que sostuvo el acusado con Rodolfo Jiménez, sobre que su suegro “le había dado la mano” y lo invitaba a invertir para que se hiciera plata y *“se la pasaba tal cual”*. Se pregunta el tribunal ¿qué pretendía pasarle tal cuál

a Jiménez? ¿el pescado, el cebiche?, claramente aludía a la droga que había adquirido de Catalán.

Sobre los aludidos hallazgos en el domicilio de Elías Catalán, expuso el funcionario de la PDI **Felipe Ignacio Valladares Catrileo**, quien refirió que el 14 de octubre de 2019 cerca de las 6.00 de la mañana, junto a dos compañeros, registraron el domicilio ubicado en villa Los Héroes, calle Glorias Navales N° 2035 de la comuna de Maipú, logrando el hallazgo de 1.115 gramos de cocaína base, 46.6 gramos de cannabis, 43.75 gramos de clorhidrato de cocaína, 29.5 gramos de tusi, que es cocaína con colorante rosa que está de moda, \$932.000 en dinero en efectivo en una prenda de vestir de Catalán. Además, mencionó otras especies de interés criminal, como 135 cartuchos de diversos calibre, un chaleco antibalas y una pesa digital.

La referida diligencia dada a conocer por Valladares fue refrendada por las **fotografías del sitio del suceso**, de los precisos **lugares en las que fueron encontradas cada una de las especies** y de las **sustancias ilícitas** propiamente tales, como pudimos observar en las **11 imágenes** que le fueron **exhibidas al policía y este explicó**.

Las sustancias dubitadas como droga encontradas en el inmueble de Catalán, fueron remitidas al Servicio de Salud O'Higgins para su análisis químico, a través del **oficio N° 663**, como lo refirieron **Cristian Marambio** y **Camila Castro**. Tal oficio -incorporado en el juicio- se encuentra fechado el 14 de octubre de 2019 y precisa la remisión en detalle de las sustancias vegetales y en polvo, además de 11 y media de pastillas dubitadas como éxtasis que omitió señalar Marambio. Dichas sustancias fueron recepcionadas en el Servicio de Salud, según consta en el documento incorporado denominado **Acta de recepción N° 2097/2019** el día 15 de octubre de 2019, asociado al aludido oficio N° 663. La sustancia vegetal remitida tuvo un peso bruto de 44,6 gramos y su análisis arrojó resultado positivo a marihuana, conforme se acreditó a través de los **Informes N° 2397 y 2398**, al que se adjuntaron los **Informes de peligrosidad y efectos para la salud pública** y **Anexos relativos a la pureza del componente THC de la marihuana**.

Siguiendo con la cadena de análisis de las demás sustancias incautadas, se aportó el **Reservado N° 919**, a través del cual se remiten desde el Departamento

Jurídico del Servicio de Salud al Subdepartamento de sustancias ilícitas, fechado el 8 de noviembre de 2019, el detalle de peso y tipo de sustancia a las que ya se ha hecho mención. Conforme los resultados de peso y análisis contenidos en los **Reservados N° 20960-2019** y los **Protocolos de Análisis Químicos de cada una de las NUE asociadas** (5187351-352-353-354-355) que fueron coincidentes y concordantes con los hallazgos de las sustancias no vegetales, se concluyó que el polvo de color dubitado como Tusi corresponde a 27.2 gramos neto de Ketamina, sustancia sujeta al control de la Ley 20.000 y que según se lee del Informe de Efectos y Peligrosidad incorporado, se encuentra calificada como una sustancia estupefaciente que produce dependencia física y psíquica, capaz de provocar graves efectos tóxicos y daños considerables a la salud pública. Además, se concluyó, que la sustancia contenida en una bolsa de nylon corresponde a 0.6 gramos neto de cocaína base a un 28% de pureza, también sujeta a la ley del ramo y el resto de la sustancia que arrojó un peso de 1.160.9 gramos neto era cafeína, sustancia regularmente utilizada para el abultamiento de las dosis de la cocaína, como lo indicó **Camila Castro** y es de conocimiento del tribunal conforme la experiencia y estudio en este tipo de casos, sin que sea conocido su uso para otros fines cotidianos ni se haya alegado en tal sentido. Además, resultó concordante con la referencia que hacía Catalán de ponerle “aliño” y que igual quedaba buena.

En definitiva, las especies encontradas en el domicilio de Catalán, correspondientes a droga de distinta naturaleza, además, cafeína, que se encontraba escondida bajo los cojines de un sofá, la pesa digital y la gran cantidad de dinero en efectivo, guardan directa relación con la calidad de proveedor de droga de Saavedra, sin que haya habido algún cuestionamiento de parte de la defensa respecto de los hallazgos, su pesaje o naturaleza.

No se considerarán las 11 unidades y fracción de pastillas analizadas como éxtasis, al no hacer referencias de ellas el funcionario Marambio o algún otro funcionario, y de igual forma no se apreciaron en las fotografías que le fueron exhibidas.

Siguiendo con los elementos que permitieron acreditar la labor de comercialización de droga por parte de Saavedra, se contó con la **declaración de Rodolfo Jiménez Medina**, alias “El gato”, quien, tal como lo hizo durante en la

investigación, declaró en el juicio y señaló que conoce a Saavedra, a quien también lo llamaban “Chiqui” y que se conocieron en la comuna de La Pintana, donde jugaban fútbol en el mismo club deportivo y a partir de esto empezó la amistad. Agregó que con el tiempo Saavedra se vino a vivir al sur y se volvieron a encontrar y a retomar la amistad; que es consumidor de droga, “cocaína más que nada”, y le compraba a Javier desde el año 2018 y 2019 cuando llegó a vivir al sur. Explicó que le compraba droga a Saavedra para su consumo personal y que se podría decir que era su cliente. Detalló que le compraba una vez cada dos semanas, entre 50 a 60 o 40 mil pesos cada vez, lo que equivalía a 4 o 5 gramos aproximados. Que en ocasiones le pagaba en efectivo, a veces le quedaba debiendo, y otras veces le transfería, pero no a su cuenta, sino que a la de terceros. Reconoció que Saavedra lo llamaba por teléfono para cobrarle y que era él quien directamente le entregaba la cocaína que le compraba en el lugar en el que se toparan o a veces iba a la casa de Saavedra y este lo atendía afuera de la vivienda. Añadió, que le quedó debiendo a Saavedra como \$200.000 o \$250.000 por las compras y recordó que debe haberle efectuado pagos a través de depósitos en más de 5 oportunidades. Este testigo, contó igualmente que lo mismo que declara en el juicio lo señaló en enero o febrero del año 2020 ante el fiscal, estando acompañado de su abogado defensor, el que le recomendó que colaborara con la investigación para optar a un procedimiento abreviado y cumplir la pena en libertad, alusión que se pudo asociar a que resultó detenido el 14 de octubre de 2019 por el hallazgo de una escopeta y dos cartuchos en su domicilio, de lo que dio cuenta la funcionaria de la PDI **María Paz Reed Vergara**.

De dicha declaración ante el fiscal a cargo, fue testigo **Camila Castro**, la que agregó al respecto que se incautó el teléfono de Jiménez, del que se pudieron extraer al menos 6 fotografías de diversos depósitos por cifras de entre \$50.000 a \$100.000, lo que era coincidente con la información obtenida de la escucha telefónica y de la declaración del deponente.

Las aludidas declaraciones de **Jiménez** y **Castro**, encontraron aval en la anunciada escucha telefónica, que pudimos oír a través de la incorporación de la **pista 120820191800**, explicada por **Camila Castro**. En dicha pista de fecha 12 de agosto de 2019, además de ofrecerle Saavedra a Jiménez que se incorpore al

negocio de la droga y que él se la pasa sin abultarla, le cobra dinero por la venta de droga, señalando Jiménez *“pal miércoles, ahora si no te cuenteo más” “he estado medio corto”* a lo que Saavedra le responde *“me pagai esa y el 5 me pagai la otra”*, para finalmente el comprador señalar *“pal miércoles te deposito una gamba”*.

Cuestionó la defensa la fiabilidad de la declaración de Jiménez, quien, a su juicio, estaba motivado por la obtención de un beneficio procesal como era un procedimiento abreviado y que, además, la vecina que declaró **-testigo 004-** sostuvo que a quien veía vender era a Osorio, más nunca al acusado, como sí lo declaró Rodolfo Jiménez. Al respecto estos jueces tuvimos en cuenta, por una parte, que el hecho que la testigo 004 no haya visto a Saavedra vendiendo directamente droga, sino que lo hiciera a través de Osorio, dice relación con la calidad de “soldado” atribuida a este último, como lo refirió la mujer, lo que en jerga delictual quiere decir que es una especie de ayudante o que está al servicio del que tiene la droga, del traficante. Además, es del todo lógico que la vecina no haya estado la totalidad de su tiempo observando lo que sucedía en las afueras del domicilio de Saavedra, sin perjuicio que, tal como lo dijo Jiménez, se haya concretado las entregas de droga “donde se toparan”.

Por otra parte, el cuestionamiento de la defensa sobre la debilidad de la declaración de Jiménez, que estaría motivada por el legítimo ejercicio de la colaboración en la etapa de investigación, no resulta suficiente por si solo para restarle credibilidad al relato del deponente, debiendo aportarse algún antecedente que desvirtúe sus dichos, sobre todo considerando que el propio acusado confirma la relación de amistad de años que existe entre ellos, a quien conoció jugando a la pelota y que era la persona a quien más conocía en Chimbarongo. La coincidencia entre el acusado y Jiménez en parte importante de la información entregada por Jiménez, salvo en aquella que incrimina a Saavedra, y el hecho que existe respaldo probatorio independiente para esto último, como la escucha telefónica y los depósitos de los que **Camila Castro** conoció a raíz de la información extraída del teléfono de Jiménez que fue incautado, refuerzan la credibilidad de lo que señaló Jiménez.

Siguiendo con los elementos incriminatorios en contra Saavedra, se contó con una conversación desarrollada entre este y un sujeto identificado como Víctor

Cornejo Veas, llevada a cabo el **13 de octubre de 2019 a las 22.23 horas**, cuya pista se incorporó a través de la difusión y fue analizada por **Camila Castro**. En dicho audio resulta relevante para una mejor ilustración la transcripción de parte importante de la conversación:

Cornejo: *...igual molí la guea', está como fuerte.*

Saavedra: *¿pero cómo quedó, buena o más o menos?*

Cornejo: *está entre buena y un poco buena.*

Saavedra: *porque el Iván dijo que quedó buena, y los cabros la probaron.*

Cornejo: *le pedí la pesa al culiao y dijo que no tenía, y yo en la mañana la pesé y pesaba 65.*

Saavedra: *muélemela toda la guea no más... le falta mucho, no era tanto.*

Cornejo: *yo le tomé foto cuando la pesé, pero no sé mandarte la foto.*

De esta conversación queda claro, tal como lo concluyó **Castro**, que se refieren a actividades propias del proceso de preparación para la venta de la droga, como es, molerla, pesarla, ver si está fuerte, quedando en evidencia que Saavedra es el que daba las indicaciones a Cornejo.

Una siguiente prueba irrefutable de que Saavedra se dedicaba a la comercialización de droga, fue la llamada entre el acusado y Juan Osorio Jorquera, alias "El coipo" o Juano, sujetos entre los que se acreditó existía contacto regular y permanente, como lo declaró la **testigo 004**, quien por la cercanía a sus domicilios los observaba juntos frecuentemente, lo que fue sostenido también por **Marambio** y **Castro**. La mentada conversación fue incorporada a través de la escucha de la pista **200820192013** por parte de **Camila Castro**. En dicha conversación Saavedra le señala a Osorio que le va a dar 4 al Iván, específicamente porque "*el Iván me va a hacer una pega y se la cambié por la pega*", en alusión a 4 dosis de droga a cambio de un trabajo, según explicó la investigadora.

Además, pudimos escuchar otras **6 pistas de audio** de conversaciones efectuadas entre **Juan Osorio y terceros**, todos consumidores de droga y que dan cuenta de que Osorio efectivamente ayudaba a Saavedra en la venta de droga. Tales escuchas fueron posibles ya que se incautó el teléfono de quien era la mano derecha de Saavedra en el tráfico de droga, como lo declaró **Cristian Marambio**, siendo igualmente, en el marco de la ya tantas veces señalada operación

Hollywood, allanado el domicilio de Osorio. De esta diligencia dio cuenta **Julio Andrés Soto Valdés**, funcionario de la PDI, indicando en lo relevante y pertinente que participó de ella el 14 de octubre de 2019 cerca de las 6.00 de la mañana y que en compañía de otros funcionarios irrumpió en el inmueble ubicado en la intersección del camino a Codegua con callejón San Agustín, Que encontraron en el dormitorio principal, al interior de un pantalón un envoltorio de nylon con una sustancia blanca, que aplicada la prueba de campo arrojó positivo a clorhidrato de cocaína, con un peso de 0.9 gramos, además, una cuchara con residuos de polvo blanco sin prueba por la cantidad, 50 bolsas del mismo tipo de la que había en el pantalón, un recipiente con creatina, sustancia que se ocupa para aumentar la droga, \$250.000 en efectivo en billetes de diferentes denominaciones, además de municiones y del teléfono celular que también fue incautado. Explicó que, pese a que había otra persona a cargo del inmueble, se le vinculó con los hallazgos porque en el lugar estaban los pantalones de Juan Osorio.

Se pudo comprobar científicamente que los 0.9 gramos efectivamente correspondían a droga, específicamente cocaína clorhidrato con un 41% de pureza, conforme la incorporación del **oficio remitido de la sustancia al Servicio de Salud O'Higgins N° 665** de 14 de octubre de 2019, al que hicieron referencia Castro y Marambio, vinculado al **Acta de Recepción N° 2095/2019** de 15 de octubre del mismo año, **Reservado N° 918 de 8 de noviembre de 2019** y el **Protocolo de Análisis Químico** que contiene el señalado resultado. Todos los documentos guardan relación a la misma cadena de custodia NUE 5187340, a lo que se agregó el **Informe de Efectos y Peligrosidad de esta sustancia para la salud pública** que da cuenta del daño en el organismo humano.

Estos hallazgos vienen a corroborar las conclusiones de **Camila Castro**, en cuanto a que Osorio apoyaba a Saavedra en la venta de droga, pues dicen relación directa con especies que se usan comúnmente para la dosificación, como son las bolsas plásticas, una cuchara con residuos y la sustancia para abultar las dosis. Además, la gran cantidad de dinero en efectivo en billetes de variada denominación que se vincula a los pagos recibidos por la venta de droga y el preciso hallazgo de clorhidrato de cocaína.

De las conversaciones que sostuvo Osorio con consumidores de droga, pudimos enterarnos a través de la pista de **24 de agosto de 2019 a las 22.39 horas**, comentada por **Castro**, en la que Osorio se encuentra hablando con un cliente consumidor y hacen referencia a una persona de nombre Guillermo y de Juan Carlos, deudores de Osorio, quien señala que de ahí en adelante no fiaba porque no le habían pagado, lo que no ocurría con su interlocutor, a quien si le podía pasar porque pagaba. Tan claro es el tenor de la conversación que Osorio señala: *“...los gueones no reconocen que uno les da un poquito más, para que sigan comprando... si yo fuera un gueon maricón se las daría justa, pero uno sabe cómo es la gueá del vicio culiado y les da más”*. Además, hace abierta alusión a Saavedra señalando que no quiere decirle de los deudores al “Chiqui” para no tener problemas.

La siguiente pista incorporada, que al igual que las restantes fue explicada y analizada en su contexto por Camila Castro, de **24 de agosto de 2019 a las 22.55 horas**, permitió escuchar a Osorio hablar con otro consumidor a quien le pide que le avise a Juan Carlos que le pague una deuda porque de lo contrario “no habrá nada pal’ 18”, explicando Castro que se refería a tener disponible droga para las fiestas patrias.

El día **25 de agosto de 2019 a las 14.23 horas**, Osorio nuevamente conversa con un tercero sobre la necesidad de conseguir un proveedor de cannabis para poder cumplir con los pedidos, interpretación que efectúa y explica la policía de manera coincidente con el tribunal.

A través de la siguiente conversación de **1 de septiembre de 2019 a las 21.57 horas**, se refuerza más aún que Osorio ayudaba a Saavedra en la venta de la droga, pues nuevamente hace referencia al “Chiqui”, el que estaba molesto y le quería pegar a Juan Carlos y al Tito, apodo de Carlos Alcaíno Alcaíno, como lo sostuvo Castro. Tal molestia se suscitaba, ya que en horas de la madrugada habían estado gritando en la vía pública que iban a comprarle droga a Osorio y por eso “le iban a cortar la mano” o sea, no había más venta para ellos, como fundadamente lo explicó la referida policía.

La siguiente pista de audio corresponde a una escucha del **2 de septiembre de 2019 a las 18.58 horas**, en la cual Osorio habla con un tercero, también consumidor, lo que se desprende puesto que le dice que se diera una vuelta para

su casa porque tenía un poco, 10 bolsitas y le insistía que fuera porque de lo contrario se iba a quedar sin ninguna cuestión para el 18, haciendo nuevamente alusión al incidente del Tito y que “...por culpa de ese huevón que fue curado cagaron todos”.

Finalmente, el día **13 de octubre de 2019 a las 12.20 horas**, previo al despliegue de la operación Hollywood, se realiza la última escucha, en la que se pudo escuchar a Juan Osorio hablando con un tercero, a quien le señalaba que quería invertir en el negocio, de lo que se pudo reafirmar que “el negocio” era de Saavedra y él solo era un intermediario.

La estrecha vinculación entre Osorio y Saavedra en términos de ser el primero el cooperador del segundo en la venta de la droga, quedó en definitiva patente con el análisis de las escuchas en su conjunto, viéndose igualmente avalado por los dichos de la **testigo 004**, que vivía a escasos metros del domicilio de Javier Saavedra y de Juan Osorio, quien sostuvo que los veía constantemente juntos y en muchas ocasiones vio a Osorio llegar en bicicleta a la casa de Saavedra. Además, que era sabido por las personas del sector que Saavedra era el que le pasaba la droga a Juan Osorio.

Con todos los elementos probatorios indicados, sea directamente y a través de los diversos indicios que permitieron articular, se pudo establecer la actividad de tráfico ilícito de drogas que se desarrollaba en la comuna de Chimbarongo, entre los meses de julio y octubre de 2019, en la que el acusado Javier Saavedra Muñoz, se relacionaba con Elías Catalán Reyes con la finalidad de adquirir distintas sustancias ilícitas y luego, ya sea personalmente, como respecto del comprador Rodolfo Jiménez Medina, o a través de Juan Osorio Jorquera, que hacía las veces de intermediario, vendía a un gran número de consumidores.

Se estableció así la configuración del delito consumado de tráfico ilícito de drogas del artículo 3° de la Ley 20.000, y no un microtráfico o comercialización de pequeñas cantidades de droga, a pesar de que en el domicilio atribuido a Javier Saavedra no se encontró elementos que lo incriminaran y tampoco fue hallado éste el día del operativo, manteniéndose prófugo por cerca de 8 meses, como lo contó **Marambio**, ya que se trató de una actividad permanente a través de la cual se transfirió droga de diversa naturaleza a muchos compradores, como quedó en

evidencia de las conversaciones entre Osorio y terceros. A lo anterior se añade, que otro de los consumidores, Rodolfo Jiménez, compraba con regularidad y una frecuencia de al menos cada quince días, lo que era coincidente con los montos de los depósitos de dinero que Castro encontró en el teléfono de Jiménez. De manera tal que, aun cuando por separada cada una de las ventas pueda ser considerada como de una pequeña cantidad, el número de compradores y la permanencia de la actividad en el periodo de la investigación permitieron concluir que estábamos en presencia de tráfico propiamente tal.

La participación del encartado quedó igualmente acreditada a través de los ya analizados medios de prueba e indicios que redundaron en una sólida presunción judicial de participación culpable en el delito en comento.

DÉCIMO CUARTO: PRUEBA DE DESCARGO Y OTROS CUESTIONAMIENTOS DE LA DEFENSA. Además de los cuestionamientos de los que ya se hecho cargo el tribunal en los considerandos precedentes, criticó la defensa que no se haya efectuado por los investigadores un levantamiento de bienes del acusado para conocer su patrimonio o capacidad económica asociada al delito de tráfico. Tal omisión resultó irrelevante porque la prueba de cargo incorporada fue suficiente para alcanzar la decisión condena sin que tampoco la defensa haya alzado una duda asociada a la falta de diligencia referida.

Además, sostuvo que las escuchas telefónicas adolecían de un margen de error en sus interpretaciones, como lo reconoció **Camila Castro**, sin embargo, en el juicio pudimos escuchar 20 pistas de audio, las que se vincularon con hallazgos de especies claramente asociadas a la imputación y otros medios de prueba, de modo que el margen de error disminuyó, al punto que el tribunal alcanzó la convicción de la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas por parte del acusado.

Indicó igualmente el defensor que no era razonable ni esperable que de haber estado el acusado vinculado con actividades ilícitas haya mantenido su número telefónico de manera pública en sus redes sociales, menos aun cuando era conocido en Chimbarongo por participar en diversas actividades de ayuda social, como quedó establecido a través de algunos de los **27 videos que le fueron exhibidos al encartado** y fueron pormenorizados en el fallo y de los parte importante de los **48 pantallazos** obtenidos desde el Facebook del encartado. De

tales obras sociales. Sin embargo, del mérito de la prueba se pudo determinar que Saavedra operaba sobre seguro, pues principalmente vendía drogas ocupando como intermediario a Juan Osorio, cuidando su imagen para no ser descubierto, siendo un elemento relevante, el que se haya acreditado que usaba dos teléfonos celulares, como se analizó en detalle en relación a la imputación por el delito de asociación ilícita.

De otra parte se esgrimió por la defensa que Saavedra realizaba también actividades laborales en faenas de construcción, a las que hizo referencia su padre **Héctor Saavedra Pardo**, sin precisar fechas o épocas y además mencionó otras actividades, como las que realizaba con un socio de nombre Héctor Rojas, el que tenía un carro en el que vendían pescado y que también su hijo vendía mariscales en la feria, y él lo ayudaba.

Para avalar dicha propuesta se incorporó a través de la **exhibición al acusado, los videos y pantallazos**, a los que se hizo alusión en detalle en el apartado de la declaración del acusado, en los que efectivamente se aprecia en varios de esos medios de prueba, al encartado principalmente en tareas de pintura.

Al respecto el tribunal estimó que, aun en el caso que desarrollara a la época de comisión del delito de tráfico actividades laborales, nada obsta a que se dedicara a la transferencia de droga a terceros, pudiendo perfectamente hacer ambas actividades de manera paralela, sin perjuicio de advertir que los videos en los que se aprecia en actividades labores, son mayoritariamente de años anteriores a la época de comisión del delito de tráfico, principalmente desde el 2008 al 2018.

El referido socio **Héctor Rojas Reuque**, declaró también en el juicio señalando que tuvo un negocio sobre pescados con Javier, el que empezó en el año 2017 en el que vendían tiburón, pero lo hacían pasar por albacora y así ganaban plata porque compraban el tiburón barato y “lo pasaban por albacora” y también vendían cebiche en el carro que él tenía, negocio que culminó en el año 2018.

De dicho testimonio, se desprende que, aun en el caso de ser efectivo lo que el testigo cuenta sobre el trabajo conjunto con Saavedra, se trató de una actividad laboral que se terminó en el año 2018, por lo tanto de julio de 2019 en adelante, ninguna vinculación con el cebiche o pescado tenía Saavedra, como este quiso

sostenerlo para intentar explicar la conversación sobre pescados y aliños que tuvo con Elías Catalán.

Finalmente, se incorporaron, también a través de la exhibición del acusado, las imágenes de **7 pantallazos sacados desde la plataforma WhatsApp** en 4 de las cuales se daría cuenta del vínculo laboral de Rodolfo Jiménez, alias “El gato” en el año 2020, el que se seguiría relacionado con el hermano del acusado para ofrecer los productos que vendía a la madre del encartado y que esta a su vez los ofertara en el puesto de la feria, lo que significaba que el gato siguió dedicándose a la venta de productos alimenticios, pero ahora no con Saavedra, sino con su familia. Lo anterior, pretendía explicar los pagos de dinero o deudas entre Jiménez y Saavedra. Sin embargo, el tribunal no modificó la conclusión en cuanto a la calidad de comprador de droga que tenía Jiménez respecto de Saavedra, conforme el claro tenor de la declaración de aquel, la que, tal como se analizó en detalle no fue desvirtuada, y además, fue avalada por otros medios de prueba, destacando además, que el propio padre de Saavedra señaló que conocía a Jiménez y a su familia el que había estado muy metido en la droga. Sin perjuicio de todo lo anterior, la defensa no exhibió las imágenes de los WhatsApp a Jiménez, para que pudieran haber sido reconocidos y/o explicados.

DÉCIMO QUINTO: CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD CRIMINAL. En la audiencia establecida en el artículo 343 del Código Procesal Penal, no hubo alegaciones referentes a circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Sin perjuicio de lo cual en el alegato final el fiscal planteó que en subsidio de la petición de condena por el delito previsto en el artículo 292 del Código Penal, se diera lugar a la agravante del artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, al emitirse una decisión condenatoria. Tal alegación fue rechazada por el tribunal por los motivos que latamente se desarrollaron en el considerando de la decisión absolutoria por el delito de asociación ilícita, habiéndose establecido que los sujetos involucrados en la cadena de distribución que se relacionaba con Javier Saavedra lo hacían motivados por intereses individuales y cada uno en una distinta etapa del proceso de comercialización de droga.

DÉCIMO SEXTO: DETERMINACIÓN DE LA PENA. El artículo 3 en relación al artículo 1, ambos de la Ley N°20.000 castiga el delito de tráfico de

drogas con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de 40 a 400 unidades tributarias mensuales.

En primer término, con respecto a la pena corporal, la fiscalía solicitó la pena de 10 años de presidio mayor en su grado medio, teniendo presente para ello la cantidad de droga y la forma de venta de la misma. Frente a ello, la defensa solicitó la aplicación del mínimo del grado, fundamentado precisamente en que en la dependencia de su defendido no se encontró ninguna evidencia relativa a este delito.

Frente a tal discusión, el tribunal tuvo en consideración lo dispuesto en el artículo 69 del Código Punitivo en cuanto a la extensión del daño causado, principalmente el hecho de que en poder del acusado no se encontró ninguna sustancia penada por la ley especial, sin perjuicio de la forma de venta de la misma, por ello entonces no se pudo vislumbrar una daño mayor al inherente al propio delito, motivo por el cual se fijará la cuantía de pena en los **5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo**.

Ahora bien, respecto de la pena pecuniaria, la fiscalía solicitó la aplicación de una multa de 100 unidades tributarias mensuales, sin argumentar mayormente en este punto. Por otro lado, la defensa solicitó la aplicación de lo dispuesto en el artículo 70 del Código Penal y, frente a la privación de libertad a que se encontraba sujeto su defendido, se pudiera rebajar la multa a 10 UTM. En este punto, el tribunal fue del parecer de aplicar la pena en su mínimo, esto es, **40 UTM**, por cuanto, como se dijo, no hubo una mayor afectación inherente al delito de tráfico, rechazando de esta forma la aplicación de lo dispuesto en el artículo 70 por cuanto la defensa no incorporó antecedente probatorio alguno asociado al caudal económico de su defendido y, el solo hecho de estar privado de libertad no basta para dar aplicación a dicha normativa.

Se agregó a las sanciones antedichas, las penas accesorias del artículo 28 del Código Penal, la obligación de proporcionar una muestra biológica para el registro de ADN siempre y cuando ésta no se haya efectuado, debiendo oficiarse para tales efectos y, por cierto, la expresa condena en costas en razón de un quinto, al resultar condenado solo por un delito imputado, en virtud de lo dispuesto taxativamente en el artículo 47 del Código Procesal Penal.

DÉCIMO SÉPTIMO: CUMPLIMIENTO DE LA PENA CORPORAL. Para efectos de la pena corporal impuesta en contra de Saavedra Muñoz, necesariamente éste deberá cumplirla en forma efectiva por cuanto, dada la extensión de la misma, no se cumple con los requisitos previstos en la Ley N°18.216.

Se deja constancia que, según consta en el auto de apertura, ratificado por los intervinientes en la audiencia de determinación de pena, el acusado se encuentra privado de libertad por esta causa, sometido a la medida cautelar de prisión preventiva desde el 11 de junio de 2019 de manera ininterrumpida, contando con un **abono de 868 días**.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 7, 14 N° 1, 15 N° 1, 18, 24, 30, 50, 67, 69, 292, 294, 432, 436, 439 y 440 del Código Penal; artículos 2 y 9 de la Ley 17.798; 1 y 3 de la Ley N°20.000; 47, 295, 296, 297, 340, 341, 342 y 348 del Código Procesal Penal; Ley 18.216; y demás normas aplicables en la especie, se declara que:

I.- Se **absuelve** a **Javier Alberto Saavedra Muñoz** de la acusación deducida en su contra por el Ministerio Público, de ser responsable en calidad de autor cooperador de un delito consumado robo con intimidación, descrito y sancionado en el artículo 436 inciso primero, en relación a lo dispuesto en el artículo 439, ambos del Código Penal, supuestamente cometido el 01 de abril de 2019 en la comuna de Chimbarongo, correspondiente al hecho N°1 de la acusación fiscal.

II.- Se **absuelve** a **Javier Alberto Saavedra Muñoz** de la acusación deducida en su contra por el Ministerio Público, de ser responsable en calidad de autor cooperador de un delito consumado robo en lugar habitado, descrito y sancionado en el artículo 440 N°1, en relación a lo dispuesto en el artículo 432, ambos del Código Penal, supuestamente cometido el 16 de abril de 2019 en la comuna de Chimbarongo, aludido en el hecho N°2 de la acusación fiscal.

III.- Se **absuelve** a **Javier Alberto Saavedra Muñoz** de la acusación deducida en su contra por el Ministerio Público, de ser responsable en calidad de autor del delito consumado de asociación ilícita, previsto y sancionado en los

artículos 292 y 294 del Código Penal, supuestamente cometido entre los meses de abril y octubre de 2019 en la comuna de Chimbarongo.

IV.- Se **absuelve** a **Javier Alberto Saavedra Muñoz** de la acusación deducida en su contra por el Ministerio Público, de ser responsable en calidad de autor del **delito consumado de tenencia de municiones**, previsto y sancionado en los artículos 2 y 9 de la Ley N°17.798 supuestamente cometido el 14 de octubre de 2019 en la comuna de Chimbarongo, aludido en el hecho N°3 de la acusación fiscal.

V.- Se **condena** a **Javier Alberto Saavedra Muñoz** a sufrir la pena de **cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y al pago de una multa equivalente a cuarenta unidades tributarias mensuales** por su responsabilidad en calidad de autor de un **delito consumado de tráfico ilícito de drogas**, previsto y sancionado en el artículo 3 en relación a lo dispuesto en el artículo 1, ambos de la Ley N°20.000, cometido entre los meses de julio y octubre de 2019, en la comuna de Chimbarongo, correspondiente al hecho N°3 del libelo pretensor.

VI.- Se le impone, asimismo, la sanción accesoria legal de **inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos** durante el tiempo de dicha condena.

VII.- La referida pena corporal deberá **ser cumplida de manera efectiva**, al no reunir Saavedra Muñoz los requisitos previstos en la Ley 18.216 para ser beneficiario de alguna de las penas sustitutivas contempladas en esa normativa, la que se contará **a partir del 11 de junio de 2019**, fecha desde la cual se encuentra sujeto en forma ininterrumpida a la medida cautelar de prisión preventiva dispuesta en esta causa, contabilizando a esta fecha un **abono de 868 días**.

VIII.- Respecto de la multa impuesta, el sentenciado deberá pagarla a su equivalente en moneda nacional de curso legal, al valor que la unidad tributaria tenga al momento de su pago. El pago deberá realizarse dentro de los cinco primeros días de cada mes, a partir del mes subsiguiente a aquél en que recupere su libertad luego del cumplimiento de la pena corporal impuesta. Si el condenado no pagare la multa impuesta o una parte de ella, el Juzgado de Ejecución podrá proceder a su conversión, conforme a lo previsto en el artículo 49 del Código Penal.

IX.- Finalmente, se condena también al sentenciado al pago de un quinto de **costas** de la causa, en razón de haber resultado condenado solo por un delito de los imputados en su contra.

Ejecutoriada que sea esta sentencia, dese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal y remítanse los antecedentes al Juzgado de Garantía de San Fernando para su cumplimiento y ejecución, y a fin que se comunique lo resuelto a los organismos que correspondan. En particular, para efectos del artículo 17 de la ley 19.970 y en caso que no se hubiere fijado la huella genética del sentenciado previamente, se ordena que ésta se determine, previa toma de muestras biológicas si fuere necesario, y que se incluya en el Registro Nacional de ADN de Condenados dependiente del Servicio de Registro Civil e Identificación.

De conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la ley 20.568, inclúyase la presente sentencia en el respectivo informe mensual al Servicio Electoral, una vez que se encuentre ejecutoriada, Ofíciase a la Corporación Administrativa del Poder Judicial en tal sentido.

Devuélvanse los documentos incorporados, previa constancia.

Regístrese.

Sentencia redactada por la jueza **Marisol López Machuca**.

RIT 71-2021.

RUC 1900685496-9

Sentencia pronunciada por los jueces titulares de este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando **Felipe Cortés Ibacache, Marcela Yáñez Cabello y Marisol López Machuca.**